

ICM@Trabajo

Respuestas de la ICM a la pandemia de COVID-19



ICM
Internacional de Trabajadores
de la Construcción y la Madera
www.icm-ct.org



Índice

Prefacio	1
Introducción	2
Repercusión en los sectores de la ICM	3
Impacto mundial de la pandemia de COVID-19	3
Trayectorias y acuerdos en materia de políticas sobre la COVID-19	6
Afiliados de la ICM en acción	8
Protección del empleo y los salarios	8
Salud y seguridad en el lugar de trabajo	10
Zonas críticas de migración y apoyo para los trabajadores migrantes	13
Acuerdos Marco Internacionales y participación de empresas multinacionales	17
Sobre medidas humanitarias	18
Sobre organización y retención de miembros	20
Matriz de medidas relacionadas con las 7 convergencias de la ICM	21
Perspectivas en los sectores de la ICM	23
Construir un mejor futuro: las prioridades de los trabajadores y las actuaciones para la recuperación tras la pandemia	23
Conclusiones	26

La ICM es una Federación Sindical Internacional que agrupa a sindicatos libres y democráticos con afiliados en los sectores de construcción, materiales de construcción, madera, silvicultura y afines.

La ICM cuenta con 334 sindicatos afiliados, los cuales representan al rededor de 12 millones de miembros en 130 países. La sede se encuentra en Ginebra, Suiza, mientras que las Oficinas Regionales se encuentran en Panamá, Malasia y Sudáfrica.

Nuestra misión es defender y promover los derechos de los trabajadores, así como mejorar las condiciones laborales y de vida en nuestros sectores. La ICM, sobre todo, tiene un enfoque basado en los derechos. Creemos que los derechos sindicales son derechos humanos y por tanto, deben estar fundamentados en la igualdad, la solidaridad y la democracia. Los sindicatos son indispensables para la buena gobernanza.

Los objetivos de la ICM incluyen 1) promover y defender los derechos humanos y sindicales; 2) aumentar la fuerza sindical; 3) promover un nivel de empleo estable y alto en nuestros sectores; y 4) influir en política y fortalecer la capacidad de las instituciones y estructuras tripartitas en nuestros sectores.

©2021 Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM).

Prefacio

“Para la ICM, el futuro que vendrá tras la pandemia traerá consigo una lucha más intensa y encarnizada en pos de derechos laborales, empleos estables y en condiciones de seguridad, salarios justos y la rendición de cuentas por parte de gobiernos y empresas. Los derechos e intereses fundamentales de los trabajadores y sus sindicatos son trascendentales para hacer del mundo un lugar mejor. Construir ese mundo mejor implica no solo abordar las repercusiones de la COVID-19 a corto y medio plazo en la salud, la economía y los trabajadores, sino también desarrollar respuestas para abordar las desigualdades, injusticias y disfunciones subyacentes que afligían a nuestro planeta y a sus habitantes desde mucho antes de que llegara la pandemia”.

Declaración de la ICM sobre la COVID-19: Resistencia frente a la adversidad a través de la sindicación
Junio de 2020



La serie de informes de ICM@Trabajo sobre las respuestas sindicales a la pandemia de COVID-19 se compone del presente informe mundial y de cinco informes regionales. Los informes pretenden documentar el extraordinario trabajo de los afiliados de la ICM en esta época de medidas de confinamiento y emergencia. El objetivo es presentar las distintas acciones y resultados, compartir buenas prácticas e inspirar a otros sindicatos para que apliquen estas experiencias a sus propios contextos nacionales. Las principales fuentes de información son la página web de la ICM con respuestas sobre la COVID-19, la base de datos interna de la ICM y la página web de la Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera (FETCM) sobre la COVID-19¹. Esta información se ha complementado con los conocimientos y las aportaciones de los afiliados y los equipos regionales y de la sede de la ICM.

Los informes regionales han sido redactados por Carmel Abao (Asia y el Pacífico), Michael Koen (África y Oriente Medio), Anne Mayher (América del Norte), Mauricio Rombaldi (América Latina y el Caribe) y Nora Wintour (región paneuropea). El informe mundial ha sido redactado por Nora Wintour. El diseño gráfico corrió a cargo de Louie Banaga y Bobet Monoso. La serie ICM@Trabajo fue coordinada por Tos Q. Añonuevo, Secretario de Educación de la ICM.

Los informes regionales se redactaron en el periodo comprendido entre abril y mayo de 2020 y representan una sinopsis de una situación que evoluciona rápidamente. La ICM agradece sinceramente las aportaciones y el trabajo de colaboración del equipo de redacción y la diligencia y rapidez del equipo de diseño gráfico. El informe mundial se ha actualizado para abarcar el periodo de 12 meses hasta febrero de 2021 de manera que coincida con el primer aniversario de las primeras medidas de confinamiento en Europa con motivo de la COVID-19 y la declaración de la pandemia por parte de la OMS.

¹ Véanse: https://www.bwint.org/es_ES/cms/covid-19-respuesta-sindical-1689 y <https://www.efbww.eu/publications-and-downloads/press-releases/covid-19-efbww-info-from-and-for-efbww-affiliates/481-a>

Introducción

La pandemia de COVID-19 ha provocado la peor crisis económica desde la Gran Depresión de los años 1930. Por encima de todo, ha puesto de manifiesto la magnitud y la profundidad del trabajo precario presente en nuestras sociedades y está afectando más a los más pobres. En algunos países, especialmente en los de ingreso alto, existen casos notables de gobiernos que trabajan con los empleadores y los sindicatos para dar con soluciones que beneficien a la mayor parte de la población. Sin embargo, los empleadores de la economía formal y, en distinta medida, la mano de obra de la economía formal han sido los principales beneficiarios de los planes de estímulo fiscal y de los planes gubernamentales de protección del empleo y los salarios. Ahora bien, muchos trabajadores precarios, por cuenta propia y microempresas, incluso en países de ingreso alto, se han visto desprovistos de cualquier forma de protección social.

En los sectores de la ICM, los más afectados han sido los trabajadores temporales, los trabajadores por contrato, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores precarios. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el 64% de los trabajadores del sector de la construcción trabajan por cuenta propia o en microempresas². En los países de renta mediana y baja, los sectores de la construcción, la silvicultura y la madera se caracterizan por un alto grado de trabajo informal y, en muchos países, existe una elevada proporción de trabajadores migrantes y refugiados. A menudo considerados como una mercancía desechable, estos trabajadores y sus familias desde sus países se han visto privados de forma repentina de sus medios de supervivencia.

Los sindicatos han reaccionado rápidamente y su presencia ha sido fundamental para negociar los paquetes de protección del empleo y los salarios; se opusieron a los intentos oportunistas de socavar la legislación laboral o los convenios colectivos y defendieron a los trabajadores destituidos sumariamente, despedidos temporalmente u obligados a aceptar licencias no remuneradas. Asimismo, los sindicatos han prestado un apoyo esencial al tratar de ampliar la protección de los ingresos para los trabajadores por cuenta propia; para los trabajadores temporales, migrantes y refugiados abandonados; y para las trabajadoras obligadas a asumir tareas de cuidado adicionales o que sufren mayores niveles de violencia de género.

Si bien se aprecian signos de recuperación económica, alentados por la esperanza de que un programa de vacunación masiva reduzca con éxito el impacto de la pandemia de COVID-19, quedan muchas incertidumbres por resolver y preocupa que la recuperación sea desigual y que aumenten las desigualdades y la precariedad laboral. La solidaridad internacional para poner las vacunas a disposición de los países más pobres, tal y como establece el Mecanismo COVAX para el acceso mundial a las vacunas contra la COVID-19, supone un primer paso esencial, pero debe ir acompañada de una serie de estrategias de recuperación diseñadas con la participación significativa de los representantes de los trabajadores y los sindicatos.



² "Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo. Tercera edición", 29 de abril de 2020

La situación de la pandemia en el plano mundial:

Repercusión en los sectores de la ICM

1. Impacto mundial de la pandemia de COVID-19

A mediados de mayo de 2020, la OIT estimaba que el 94% de la población activa mundial vivía en países afectados por algún tipo de medida para cerrar los lugares de trabajo, y que el 20% de la población activa mundial vivía en países con estrictas restricciones al trabajo, salvo en el caso de los servicios esenciales. En enero de 2021, esa cifra general no había cambiado de manera significativa, pero

se habían introducido restricciones geográficas o sectoriales en lugar de medidas que afectarían a toda la economía. Los gobiernos han frac-

sado estrepitosamente a la hora de coordinar las respuestas a la COVID-19 y, en su lugar, han optado por medidas nacionales, basadas en una combinación de consideraciones políticas y económicas y la emergencia sanitaria. Se han producido segundas y terceras olas de infecciones; actualmente, Europa y América Latina se enfrentan a un mayor aumento de las tasas de infección y a una aparición alarmante de nuevas cepas del virus. Los programas de vacunación se han puesto en marcha de manera muy desigual. Se ha acusado a los países más ricos de acaparar suministros, y los primeros programas de vacunación en África no comenzaron hasta marzo de 2021. Las dificultades en la fabricación, los cuellos de botella en el suministro, sumados a la fragilidad de los sistemas sanitarios de los países en desarrollo y a las dudas de varios grupos de población respecto a la vacuna denotan que es probable que el virus de la COVID-19 y sus variantes sigan en circulación en un futuro próximo y que será necesario continuar con una serie de medidas de salud pública.

Según la OIT, las horas de trabajo se han reducido en un 8,8% a escala mundial en 2020, en comparación con el último trimestre de 2019. Este porcentaje equivale a la pérdida de la abrumadora cifra de 255 millones de empleos a tiempo completo. En

cuanto a las diferencias regionales, las Américas sufrieron las mayores pérdidas, y Europa y Asia Central tuvieron el menor número de pérdidas en aquellos casos en los que los programas de mantenimiento del empleo han apoyado la reducción de la jornada laboral. Gracias a las pruebas intensivas y al rastreo, sobre todo en Asia Oriental, algunos países han conseguido controlar la propagación de la infección y minimizar las restricciones a la actividad económica mejor que otros. Dado que el alcance y el impacto de las medidas de confinamiento han variado, se espera que los efectos a largo plazo sobre el empleo y el ritmo de recuperación económica también varíen. Los trabajadores informales, jóvenes, migrantes y las mujeres trabajadoras, quienes ya se encuentran entre los grupos más vulnerables, serán sin duda los más afectados por las consecuencias económicas a largo plazo de la COVID-19.

La OIT advirtió de que 1.600 millones de trabajadores informales se encuentran en “peligro inmediato de que sus medios de vida sean destruidos” a causa de la repercusión económica de la COVID-19. Del total de la población activa a escala mundial —que asciende a 3.300 millones— unos 2.000 millones trabajan en la “economía informal” con contratos de corta duración o por cuenta propia. La OIT trató de calcular la repercusión de la COVID-19 en los ingresos de los trabajadores informales a partir del índice de paridad del poder adquisitivo de 2016. Las cifras incluyen los ingresos de los trabajadores por cuenta propia y los asalariados informales. En todo el mundo, se ha experimentado un descenso de los ingresos medios mensuales equivalente a 535 dólares; en África, los ingresos medios esperados del trabajo informal en el primer mes de la crisis descendieron de 518 a 96 dólares; y de 1.253 a 387 dólares en las Américas³.

Si bien, antes de la crisis de la COVID-19, el desempleo juvenil a escala mundial ya era muy pronunciado, la situación actual ha empeorado, puesto que más de tres cuartas partes de los trabajadores jóvenes desempeñan empleos informales, especialmente en Asia Meridional y África. Los jóvenes menores de 30 años en busca de empleo constituyen en torno al 70% de los flujos migratorios internacionales. Además, la capacitación profesional y técnica y los programas de aprendizaje en el empleo se han visto interrumpidos de forma masiva,



3 “Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo. Tercera edición”. Actualizado a 29 de abril de 2020 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743154.pdf

ya que el 98% de las personas consultadas para una encuesta realizada recientemente por la OIT, el Banco Mundial y la UNESCO informaron del cierre total o parcial de las escuelas de capacitación técnica y profesional. La OIT alude a las cicatrices a largo plazo en lo que respecta a las perspectivas de empleo de esta “generación confinada”⁴.

Los trabajadores migrantes y sus familias se han visto afectados por partida doble. Los trabajadores migrantes se cuentan entre los más vulnerables ante la pérdida de sus puestos de trabajo, y muchos de ellos en el sector de la construcción se han visto obligados a pasar períodos de cuarentena en alojamientos superpoblados y sin poder volver a sus hogares. Muchos migrantes internos han tenido que hacer largas caminatas a pie para regresar a sus pueblos de origen. No obstante, muchas familias de todo el mundo dependen de las remesas para sobrevivir. El Banco Mundial estima que los envíos de remesas a los países de renta mediana y baja podrían disminuir hasta un 20% durante 2020, lo cual equivale a 110.000 millones de dólares, lo que acarrearía dificultades adicionales e inseguridad de los ingresos.

Las trabajadoras de los sectores de la ICM suelen tener un trabajo precario y mal remunerado y no han podido acogerse a los planes de protección del empleo y los salarios. Como cuidadoras principales durante la crisis de la COVID-19, han asumido responsabilidades adicionales a la hora de atender a los enfermos y cuidar de los niños tras el cierre de las escuelas. Asimismo, a raíz de las medidas de confinamiento y de la creciente ansiedad y estrés financiero, ONU-Mujeres ha informado de un aumento pronunciado de los casos de violencia doméstica contra las mujeres; las llamadas a las líneas de ayuda contra el maltrato doméstico en la Argentina aumentaron en un 67% en el mes de abril en comparación con el año anterior. Por lo tanto, muchas mujeres se enfrentan también a una triple pandemia socioeconómica: mayor inseguridad financiera, mayores responsabilidades de cuidado y mayor riesgo de violencia doméstica.

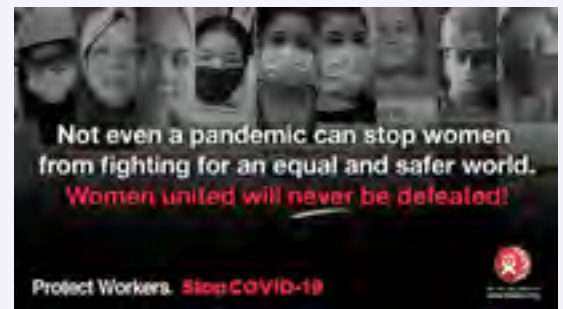
Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la contracción del crecimiento mundial para 2020 se sitúa en un 3,5% y los volúmenes de exportación e importación a escala mundial se redujeron un 8% en 2020, lo que refleja tanto la disminución de la demanda mundial como el impacto de las restricciones al transporte. Antes de la pandemia, el sector de la construcción representaba alrededor del 7,7% del empleo mundial y se preveía

que contribuyera al 13,4% del producto interno bruto (PIB) mundial⁵; asimismo, se esperaba que creciera un 3,1%, frente al 2,6% de 2019. A día de hoy, se estima que, en 2020, el sector de la construcción se contrajo un 2,9% a escala mundial. En el segundo trimestre de 2020, las horas de trabajo en el sector de la construcción cayeron un 14,8% y un 4,0% en el tercer trimestre. Las interrupciones causadas por la COVID-19 han variado mucho de un país a otro y según el tipo de proyecto. En Asia Meridional y Sudoriental, se espera que la industria se contraiga un 8,5% en 2020. En la Argentina, se estima que la industria de la construcción ha disminuido un 31,5% en 2020 y que se contraerá otro 5% en 2021. En Malasia, la producción de la industria se redujo un 17,2% debido a las estrictas medidas de contención relacionadas con la COVID-19. En África Subsahariana, la previsión de crecimiento de la producción en el sector de la construcción para 2020 era del 5,2%, y del 4,5% en Oriente Medio y Norte de África⁶.

Aunque los gobiernos y las autoridades públicas tratan de reactivar la economía con programas de estímulo e inversiones en infraestructuras, el acceso a la

financiación variará y puede ser muy limitado en los países con altos niveles de deuda. Según los informes de GlobalData, a pesar del colapso histórico de las actividades de construcción en el primer semestre de 2020, en muchos países ha comenzado a recuperarse la producción de la construcción. En enero de 2021, se estimó que la producción mundial del sector de la construcción crecería un 4,5% en 2021. En algunos países se prevé una rápida recuperación, como en la India, donde se espera que el sector de la construcción crezca un 14,5% en 2021.

En el sector de la silvicultura y la madera, aunque por lo general se autorizaron las actividades en materia de gestión forestal durante la duración de las medidas de confinamiento, el impacto en las industrias forestales y de la madera ha sido más grave, lo que también está relacionado con la crisis del sector de la construcción. Un gran número de países informan de una reducción de las operaciones o de despidos en los aserraderos. Muchos países en desarrollo dependen en gran medida del comercio internacio-



4 “Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo. Cuarta edición”. Actualizado a 27 de mayo de 2020

5 “Impact of COVID-19 on the construction sector”, Nota informativa sectorial de la OIT, enero de 2021; disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_767303.pdf

6 Confederación de Asociaciones Internacionales de Contratistas (CICA). “Strategic Watch: COVID-19 Overview by country and region” (situación a 15 de febrero de 2021)

Impacto Global de la pandemia COVID-19 en el Empleo



A enero de 2021, el 93% de la fuerza laboral mundial vive en países afectados por cierres de lugares de trabajo



Las horas de trabajo disminuyeron a nivel mundial un **8,8% en 2020** en comparación con el último trimestre de 2019 anterior al COVID-19 (OIT)

El equivalente a **255 millones** de puestos de trabajo a tiempo completo se



En marzo de 2020, **1.6 billones** de trabajadores informales estaban en peligro inmediato de perder sus medios de subsistencia (OIT)

En mayo de 2020, el 98% de las escuelas profesionales encuestadas estaban completa o parcialmente cerradas (OIT-Banco Mundial, UNESCO). La OIT advirtió sobre la cicatriz laboral a largo plazo que enfrentarán los trabajadores jóvenes de la generación del 'encierro'



Las remesas enviadas por trabajadores migrantes a países de ingresos bajos y medianos cayeron hasta un 20% en 2020 en comparación con 2019, un equivalente a 110 billones de dólares. Esto creó más penurias e inseguridad de ingresos (Banco Mundial).



Fuerte aumento de los casos de violencia doméstica contra las mujeres como resultado de las cuarentenas mundiales. En Argentina, hubo un aumento del 67% en las llamadas a las líneas de ayuda por abuso doméstico en abril de 2020 en comparación con el mismo mes del año pasado (ONU Mujeres).



Antes del COVID-19, se esperaba que la industria de la construcción global creciera un 3,1% en 2020, frente al nivel del 2019 de 2,6%. Ahora se espera que crezca solo un 0,5% (Datos globales).

nal, por lo que se enfrentan a graves trastornos y a la caída en picado de los volúmenes de exportación de madera en rollo y productos de madera. Un análisis preliminar de los datos comerciales correspondientes a enero y febrero de 2020 reveló que las importaciones o exportaciones de productos de madera y papel, incluido mobiliario, de los grandes países disminuyeron considerablemente, desde un 6% en Estados Unidos hasta un 27% en el Brasil⁷. Una encuesta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) realizada en junio de 2020 concluyó que las cadenas de valor de la madera y la silvicultura se habían visto gravemente afectadas, con cierres temporales, reducciones salariales y pérdidas de puestos de trabajo temporales o permanentes. Los departamentos forestales de los países temen un impacto significativo en los recursos disponibles en el futuro para una gestión forestal sostenible.⁸

2. Trayectorias y acuerdos en materia de políticas sobre la COVID-19

Desde el principio de la pandemia de COVID-19, los sindicatos dieron una respuesta rápida y defendieron que las necesidades de los trabajadores no debían pasarse por alto en el conjunto de las medidas de apoyo gubernamentales adoptadas para hacer frente a la emergencia. Abogaron por que se preservaran los puestos de trabajo y los programas de subsidio salarial para no penalizar a los trabajadores en los casos en que las empresas de los sectores de la ICM se habían visto obligadas a interrumpir sus actividades. Los interlocutores sociales en los planos nacional, regional y empresarial y en el contexto de la Unión Europea (UE) se propusieron acordar protocolos adecuados en materia de higiene y seguridad y salud ocupacional y modalidades de trabajo específicas, con el fin de mantener las operaciones en la medida de lo posible, salvaguardando la seguridad de los trabajadores y con arreglo a los requisitos reforzados en materia de emergencias sanitarias. En relación con la situación posterior a la crisis, los sindicatos instaron asimismo a que se ofrecieran garantías de que no se deteriorarían las condiciones de trabajo tras la reanudación de las operaciones, ni los planes de garantía del empleo —en particular los dirigidos a los jóvenes—; y de que los planes de estímulo o adquisición pública futuros respaldarían la transición hacia una recuperación europea verde con bajas emisiones de carbono.

En el Sur Global, los afiliados de la ICM han tratado de llevar a cabo labores de promoción a través de los

mecanismos de negociación centralizados o el diálogo tripartito siempre que ha sido posible. Cuando estos procesos no están disponibles, muchos afiliados de la ICM, en particular —aunque no exclusivamente— en el sector de la construcción, informan de que existen tantos niveles de subcontratación y múltiples pequeños empleadores que resulta extremadamente difícil entablar negociaciones bilaterales que incluyan a todos estos empleadores. Los sindicatos han adoptado la estrategia basada en centrarse en los contratistas principales e intentar conseguir el cumplimiento luego por medio de la cadena de subcontratación, mientras negocian con otros empleadores cuando los trabajadores solicitan su ayuda.

En África y Oriente Medio, los sindicatos informan de que en algunos países han aumentado las consultas sobre las medidas de emergencia relativas a la COVID-19. Los afiliados de la ICM, incluidos los de Bahrein, Egipto, Ghana, Jordania, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nigeria, el Estado de Palestina, el Senegal y Túnez, han firmado acuerdos tripartitos que impiden los despidos y protegen total o parcialmente los ingresos de los trabajadores durante períodos que abarcan desde dos semanas hasta dos meses.

En Asia y el Pacífico, la mayoría de los gobiernos introdujeron políticas y medidas relativas a la COVID-19 de forma unilateral, aunque en Australia, Camboya, Myanmar y Tailandia, los afiliados de la ICM participaron activamente en la elaboración de las políticas gubernamentales. Muchos sindicatos han llevado a cabo actividades de promoción para influir en las medidas de ayuda anunciadas por el gobierno, y se han coordinado con grupos de la sociedad civil para pedir a los gobiernos que amplíen las prestaciones con el objetivo de que también abarquen a los trabajadores inmigrantes. Sin embargo, en la India, los gobiernos estatales han suspendido las leyes que protegían la libertad de asociación y los salarios mínimos sin consultar a los sindicatos. El Consejo de Afiliados Indios de la ICM (IAC) presentó una queja a la OIT y otro caso al Tribunal Supremo de la India para impugnar estas reformas.



7 FAO: The impacts of COVID-19 on the forest sector: How to respond? 23 de abril de 2020, disponible en: <http://www.fao.org/3/ca8844en/CA8844EN.pdf>

8 FAO (2020). Impactos de la COVID-19 en las cadenas de valor de la madera y la respuesta del sector forestal: Resultados de una encuesta mundial realizada en 2020. Roma, disponible en: <http://www.fao.org/3/cb1987es/CB1987ES.pdf>



En mayo, el Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE) del Departamento de Carolina del Sur emitió la Consulta laboral n.º 17, que permitía a los empresarios recortar los salarios y las prestaciones a cambio de ofrecer protecciones al empleo, y la Orden departamental n.º 213, que permitía al DOLE suspender los casos de los tribunales laborales, suspender las inspecciones rutinarias en el lugar de trabajo y las investigaciones respecto a quejas en materia de salud y seguridad ocupacional. La Asociación de Sindicatos, afiliada de la ICM, criticó duramente estas medidas y exigió que el DOLE se comprometiera a mantener un diálogo real convocando consejos tripartitos industriales para proteger los puestos de trabajo y desarrollar los protocolos relativos a la COVID-19.

En América Latina y el Caribe, se firmaron acuerdos tripartitos entre los sindicatos, el Ministerio de Trabajo y las asociaciones de empresarios de la construcción en Panamá, el Perú, el Ecuador, Colombia y la Argentina. Por ejemplo, el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) argentino brindó ayudas a las empresas para proteger el empleo mediante un plan de subvenciones salariales. En otros países, las medidas se introdujeron con consultas previas mínimas o nulas. En el Brasil, el Gobierno trató de reformar la legislación laboral mediante un decreto ministerial que contemplaba la suspensión temporal de los contratos de trabajo durante cuatro meses sin indemnización y sin consultar a los sindicatos. Tras la presión sindical y parlamentaria,

el Presidente Jair Bolsonaro se vio obligado a revocar este decreto.

En América del Norte, los afiliados de la ICM han trabajado con otros sindicatos para reforzar las disposiciones relativas a las prestaciones por abogar por la introducción de programación salarial. En los Estados Unidos, concreto de las labores de promoción provisión de protección de la asistencia ante la emergencia de la COVID-19, s asegurados como para los no asegurados temporalmente, así como la ganada por enfermedad para aquellos n tener ese derecho.

En numerosos países europeos, los gobiernos, en consulta con los interlocutores sociales, han aprobado leyes u otras medidas dirigidas a proteger a los trabajadores de los despidos. Las medidas de desempleo temporal y parcial se flexibilizaron y los gobiernos acordaron una serie de paquetes de remuneración para los trabajadores y las empresas con la condición de que no se despidiera a los trabajadores.

De acuerdo con una encuesta de la base de datos de la ICM, en el sector de la construcción de la región paneuropea, en el 47% de los casos los gobiernos introdujeron planes unilaterales o con cierto grado de consulta con los interlocutores sociales; en el 30% de los casos hubo acuerdos bipartitos; y en el 23%, acuerdos tripartitos. En los sectores de la madera y de fabricación de mobiliario, en torno a un tercio de los sindicatos encuestados indicaron que se habían firmado acuerdos bipartitos o tripartitos, aunque el número de respuestas fue bastante limitado.

Afiliados de la ICM en acción

1. Protección del empleo y los salarios

Ante las medidas de confinamiento y las interrupciones de la actividad laboral, los sindicatos de los sectores de la ICM pidieron que se protegieran el empleo y los salarios, que no se obligara a los trabajadores a firmar despidos o contratos de trabajo modificados ni a tomar licencias no remuneradas. Exigieron que se mejoraran las prestaciones por desempleo y los programas de asistencia social para los más vulnerables, así como la cobertura de los sistemas de seguro médico y las disposiciones sobre las licencias por enfermedad. Defendieron que los sindicatos deben ocupar un papel preponderante en la gestión de la crisis.

En África y Oriente Medio, las medidas de protección del empleo se dirigieron generalmente a través del empleador e incluían medidas para abonar una parte del salario durante un periodo de tiempo determinado. En Sudáfrica, la Unión Nacional de Mineros (NUM) y el Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Afines (BCAWU) alcanzaron acuerdos en los consejos de negociación sectoriales para garantizar que los trabajadores pudieran acceder a las prestaciones por desempleo designadas específicamente para las pérdidas de ingresos fruto de la COVID-19. En el Senegal, el 3 de abril, el Gobierno aceptó garantizar el 70% de los salarios de los trabajadores despedidos temporalmente a condición de que no se les despidiera de forma permanente. Los dirigentes sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción e Infraestructura (SNTC/BTP) se esforzaron para garantizar que estas medidas entraran en vigor. En Túnez, la FGBB/UGTT debatió en el consejo tripartito los planes de protección salarial, incluido el pago del 100% de los salarios durante el mes de abril. Se barajaron otras medidas no relacionadas con el trabajo, como los pagos acelerados de la seguridad social, las transferencias en efectivo del fondo de la seguridad social con carácter extraordinario o limitadas en el tiempo y paquetes de alimentos para los más vulnerables en muchos países. Sin embargo, los trabajadores migrantes, ocasionales y de sectores informales no solían tener derecho a estas prestaciones y los trabajadores no siempre han podido acceder a ellas. Por ejemplo, en Burkina Faso, la Federación de Trabajadores de la Construcción y la Madera de Faso (FTBBF) destacó las dificultades de los canteros, que perdieron gran parte de sus ingresos al suspenderse los proyectos de construcción. Muchos canteros son mujeres y la FTBBF pidió al Gobierno que les proporcionara equipos de protección personal (EPP) y medidas de ayuda, como paquetes de alimentos.

En Asia y el Pacífico, tanto Australia como Nueva Zelanda promulgaron planes de subsidios salariales para evitar el despido de trabajadores. En Nueva Zelanda, el programa consistía en una subvención salarial semanal, originalmente por un periodo de 12 semanas que luego se amplió. La industria forestal se vio especialmente afectada por la caída de la demanda de China, quien copa más de la mitad de la producción de troncos en bruto de Nueva Zelanda, y el Gobierno destinó un fondo especial para reubicar a los trabajadores forestales en otros sectores. En Hong Kong, el Gobierno promulgó un plan de apoyo al empleo equivalente al 50% del salario mensual, pero el Sindicato de Trabajadores de la Construcción y de Planta General (CSGWU) informó de que la mayoría de los trabajadores apenas recibían estos beneficios o no tenían derecho al plan. En Singapur, un plan de apoyo al empleo similar financiaba el 25% de los salarios, pero solo podían solicitarlo los ciudadanos o residentes permanentes, y no los trabajadores inmigrantes temporales.

En otros países de Asia, los gobiernos prohibieron los despidos pero no proporcionaron subsidios salariales adecuados o se limitaron a ofrecer pagos únicos en efectivo o paquetes de alimentos a los trabajadores. En la India, a pesar de que el Gobierno prohibió los despidos o la rescisión de los contratos de servicios hasta mediados de mayo, el Comité de Afiliados Indios informó de que muchas empresas de la construcción, el cemento y las canteras de piedra solo pagaron a los trabajadores fijos durante el confinamiento, y no a los trabajadores por contrato. En el sector forestal minoritario de los estados de Guyarat y Odisha, durante la temporada de recogida de hojas de tendu y sal, los sindicatos de dichos estados solicitaron con éxito al Gobierno que permitiera realizar este trabajo. En Indonesia, los sindicatos intentan renegociar las cláusulas de los convenios colectivos para proteger mejor a los trabajadores con jornadas reducidas o despedidos como consecuencia de pandemias o desastres naturales, tales como inundaciones.



nes, huracanes o incendios forestales, y ofrecer oportunidades de reciclaje profesional a los que pierden su empleo.

En América Latina y el Caribe, los sindicatos de algunos países pudieron preservar el empleo y los salarios de los trabajadores protegidos por convenios colectivos. En el Perú, en el sector de los materiales de construcción, el Sindicato de Trabajadores de Fabrica Peruana Eternit SA (SITRAFAPESA), SITRACESANLO, la Federación de Trabajadores del Cemento y Premezclado del Perú (FETRACEPPE) y el Sindicato Único de Trabajadores de Faber Castell Peruana (SUTFACAP) negociaron con éxito la suspensión temporal del trabajo sin perjuicio de los derechos y las prestaciones de los trabajadores según

lo estipulado en sus convenios colectivos. En Panamá, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) negoció un acuerdo tripartito con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) para garantizar los salarios de los trabajadores de la construcción que no



estaban trabajando como resultado de la cuarentena impuesta desde el 20 de marzo. Además, cada trabajador recibía vacaciones pagadas por adelantado, 80 dólares de los Estados Unidos al mes como resultado del Plan Panamá Solidario, así como comida y una contribución solidaria de 60 dólares al mes pagada directamente por el sindicato. En muchos otros países se despidió a los trabajadores de la construcción, quienes se quedaron sin ninguna fuente de ingresos.

En América del Norte, los afiliados de la ICM en los Estados Unidos trabajaron con otros sindicatos para mejorar la Ley CARES de ayuda, alivio y seguridad económica contra el coronavirus a fin de ampliar el derecho a las prestaciones por desempleo y aumentar su importe y duración, así como de abonar pagos inmediatos sin período de espera. La Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM) testificó ante un grupo del Congreso para apoyar una ley de garantía salarial. El 20 de mayo, los Trabajadores Siderúrgicos Unidos exigieron medidas gubernamentales adicionales, como un subsidio salarial completo y una ampliación de los criterios de elegibilidad para que también se protegiera a los desempleados de larga duración, a quienes se ven obligados a dejar su trabajo a causa de la COVID-19 y a quienes no alcanzan el umbral de ingresos. También pidieron al Gobierno que

garantizara que los empleadores que recibieron ayudas públicas se comprometieran a aplicar una moratoria de los despidos, la externalización y la deslocalización. Además, los sindicatos también reclamaron mejores protecciones para los trabajadores con estatus de trabajador extranjero temporal y para los trabajadores indocumentados. En el Canadá, los afiliados de la ICM y otros sindicatos colaboraron con las asociaciones de empleadores para exhortar al Gobierno a que adoptara medidas especiales, como el Beneficio de Respuesta a Emergencias del Canadá (CERB) y el Subsidio de Salarios de Empleo del Canadá, que cubre el 75% de los salarios.

En numerosos países de la Unión Europea, los gobiernos, en consulta con los interlocutores sociales, han aprobado leyes u otras medidas dirigidas a proteger a los trabajadores de los despidos. Las medidas de desempleo temporal y parcial se simplificaron y los gobiernos acordaron una serie de paquetes de remuneración para los trabajadores y las empresas con la condición de que no se despidiera a los trabajadores. Existe una serie de buenas prácticas en las que los acuerdos tripartitos y bipartitos garantizaron que los trabajadores recibieran protección del empleo y los salarios. En los países nórdicos, en Dinamarca, un acuerdo tripartito estableció el reembolso del 75% de los costos salariales con un límite de 23.000 coronas danesas al mes durante tres meses para los trabajadores con salarios mensuales; asimismo, se reembolsó el 90% de los salarios con un límite de 26.000 coronas al mes para los trabajadores con salarios por hora; todo ello a condición de que las empresas no despidieran a los empleados por motivos económicos durante ese periodo. Según los afiliados de la ICM, este plan ha logrado evitar los despidos masivos.

En Alemania, las autoridades federales acordaron indemnizar a los trabajadores con horas de trabajo reducidas. Sin embargo, el 24 de marzo, el Sindicato de la Construcción, Silvicultura, Agricultura y Medio Ambiente (IGBAU) criticó el plan del Gobierno por considerarlo sumamente injusto, ya que se reembolsaban por completo las cotizaciones a la seguridad social de los empleadores, mientras que los trabajadores con jornada reducida solo recibían una compensación del 60% o el 67% de los salarios que habían perdido. En el Reino Unido, el Gobierno introdujo un plan de mantenimiento del empleo por el que los trabajadores despedidos temporalmente a causa de la emergencia de la COVID-19 recibieron el 80% de sus salarios, con un límite de 2.500 libras esterlinas al mes. Los sindicatos también reclamaron con éxito la adopción de medidas adicionales destinadas a proteger a los trabajadores por cuenta propia. UNITE abogó por un sistema que garantizara los ingresos para más del millón de trabajadores de la construcción por cuenta propia o que perciben sus salarios por medio de nóminas y “empresas paraguas”, afirmando que no deberían verse obligados a elegir entre su salud o pasar hambre y penurias.

En algunos países de Europa Central y Oriental, Sudo-oriental y de los Balcanes Occidentales, aunque los gobiernos han ofrecido ciertas protecciones, no han evitado la pérdida de muchos puestos de trabajo, especialmente de trabajadores temporales. Además, la compensación salarial se consideró muy insuficiente y en algunos casos incluso por debajo del nivel de los subsidios de desempleo comunes. En general, los gobiernos aplicaron las disposiciones de la legislación laboral ordinaria y del derecho de sociedades, y no se renovaron los contratos de los trabajadores con contratos de corta duración, quienes perdieron el acceso a las prestaciones por desempleo. En aquellos casos en los que sí se pusieron en marcha dichas medidas especiales de protección, por lo general estas solo abarcaban un período breve de dos o tres meses. Además, en Croacia, Polonia y Hungría, los sindicatos de la ICM expresaron su preocupación, pues los Gobiernos estaban utilizando la situación de emergencia ocasionada por la COVID-19 como justificación para debilitar las leyes laborales y socavar los convenios colectivos nacionales o sectoriales.

En Turquía, los sectores de la construcción y la silvicultura siguieron funcionando durante el confinamiento. YOL-IS, el Sindicato Turco de Trabajadores de la Carretera, la Construcción e Infraestructura, consiguió negociar la protección salarial total de los trabajadores de las carreteras públicas, mientras que los trabajadores más vulnerables a la COVID-19 pasaron a estar en situación de licencia remunerada. En el sector privado, se acordó una moratoria de los despidos de tres meses de duración aplicable a todos los empleadores y trabajadores. Sin embargo, las empresas podían imponer una licencia no remunerada a sus trabajadores con un estipendio diario de 39 liras (o 5,80 dólares de los Estados Unidos) —apenas la mitad del salario mínimo—. Los sindicatos de los sectores de la ICM criticaron la actuación gubernamental; argumentaron que las autoridades deberían haber acordado un subsidio por jornada reducida que no obligara a los trabajadores a recurrir a licencias no remuneradas.

En Rusia, el Gobierno decretó un confinamiento de una semana a partir del 15 de abril, que se prolongó hasta mediados de mayo, y todos los trabajadores de los sectores no esenciales pasaron a estar en situación de licencia remunerada. El presidente Putin declaró que los trabajadores recibirían su salario completo durante el confinamiento, pero en la mayoría de los casos los empleadores anunciaron un cierre temporal de los lugares de trabajo y abonaron dos terceras partes de los salarios, tal y como estipula el Código del Trabajo. La mayoría de las empresas de la construcción, la madera y la silvicultura continuaron sus operaciones; algunas anunciaron un cese temporal de las actividades y abonaron dos terceras partes de los salarios, y en algunos casos, como IKEA, los trabajadores cobraron su salario completo.



2. Salud y seguridad en el lugar de trabajo

Los estudios ponen de manifiesto el hecho preocupante de que los trabajadores de la construcción y de los materiales de construcción tienen casi cuatro veces más probabilidades de morir de COVID-19 que el personal administrativo. Debido a la exposición profesional previa al polvo, los productos químicos, los humos de combustible y de soldadura, entre otros, estos trabajadores padecen tasas especialmente elevadas de enfermedades respiratorias y de supresión de la respuesta inmunitaria⁹. Por esta razón, la ICM y sus afiliados han estado a la vanguardia en el apoyo a las medidas de salud pública para contener la propagación de la infección y garantizar la entrada en vigor de todas las medidas de salud y seguridad necesarias para proteger a la fuerza de trabajo.

La ICM ha mantenido que los sindicatos desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar que los empleadores cumplan con sus responsabilidades para velar por la seguridad de los trabajadores y para desarrollar, junto con los sindicatos, un plan de respuesta a la COVID-19, según lo establecido en el artículo 20 del Convenio núm. 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores. La ICM presentó la campaña “Proteja a los trabajadores. Alto al COVID-19” y los sindicatos llevaron a cabo una labor crucial de concienciación en los centros de trabajo, a través de los comités de salud y seguridad ocupacional y de los mecanismos bipartitos y tripartitos, especialmente al comienzo de la pandemia, cuando mucha gente no conocía la información básica sobre el virus y la enfermedad.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 28 de abril de 2020, la ICM se unió a otros sindicatos de ámbito mundial en el Consejo de Sindicatos Mundiales para instar a los gobiernos y los organismos de salud y seguridad en el trabajo de todo el mundo a que reconocieran el SARS-CoV-2 como un riesgo laboral y la COVID-19 como una enfermedad profesional. Reconocer el virus como un riesgo conlleva que los empleadores asuman la responsabilidad de proteger a sus trabajadores en la medida de lo posible; y reconocer la enfermedad garantizaría el derecho a la

⁹ Según las cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido, 11 de mayo de 2020

representación sindical y a la aplicación de medidas acordadas para mitigar el riesgo; así como a la indemnización en caso de haber estado expuesto a una enfermedad relacionada con el trabajo.

Además, el 20 de mayo de 2020, el Consejo de Sindicatos Mundiales escribió una carta conjunta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que expresaba su grave preocupación por las nuevas directrices de la OMS en materia de salud pública y medidas sociales en el lugar de trabajo en el marco de la COVID-19. Dichas directrices se redactaron sin consultar a los sindicatos y no cumplen las normas de la OIT, incluidos el Convenio núm. 155 de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo y los convenios específicos del sector de la construcción, la agricultura y la minería. Estas normas se han incorporado a muchas políticas nacionales de salud pública y a acuerdos con la industria. El Consejo de Sindicatos Mundiales señala que la recomendación relativa al distanciamiento físico de “al menos un metro” es insuficiente. Varias políticas públicas y acuerdos de la industria han hecho hincapié en mantener en todo momento un distanciamiento físico de dos metros. Por último, las directrices de la OMS no mencionan el dere-



cho de los trabajadores y sus sindicatos a participar en las evaluaciones de riesgo y las medidas de prevención ni el derecho a negarse a llevar a cabo un trabajo que suponga un riesgo grave e inminente para la salud.

A medida que la pandemia se prolongaba, era cada vez más necesario encontrar formas de continuar con la labor sindical y proteger a los trabajadores al mismo tiempo. En febrero de 2021, la ICM publicó una guía práctica de salud y seguridad ocupacional para los sindicatos durante la pandemia de COVID-19. En un formato de fácil lectura, ofrece a los afiliados un proceso gradual con el que examinar los riesgos relativos a la COVID-19 en las oficinas de los sindicatos y durante las actividades sindicales, así como para aplicar medidas de mitigación. Asimismo, incluye tres hojas informativas, o “circulares”, que aportan información sobre el virus, los equipos de protección personal (EPP) y las medidas de limpieza y desinfección.

En el plano nacional, dentro de la UE hubo numerosos países (Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, los Países Ba-

jos, Alemania y España) que mantuvieron conversaciones bipartitas y tripartitas que derivaron en diversos protocolos o acuerdos sobre el trabajo durante la pandemia de COVID-19 o al reanudar el trabajo tras el confinamiento y el cierre de los lugares de trabajo —en caso de que se hubieran producido—. Entre otros aspectos, se revisaron las cuestiones relacionadas con las medidas de distanciamiento social; la desinfección habitual de instalaciones y espacios comunes; el equipo de protección personal apropiado, incluidas mascarillas, gafas y guantes de seguridad; la introducción de turnos y horarios de trabajo escalonados; las exenciones de trabajo para los “grupos de riesgo”; y otras medidas relativas a las cantinas, el alojamiento de los trabajadores y las instalaciones de transporte. El distanciamiento social mínimo establecido variaba de 1,5 metros a 2 metros, también en el transporte. No obstante, en muchos países de Europa Occidental y otras subregiones, los sindicatos han señalado que los protocolos no se están aplicando de manera adecuada.

En los Países Bajos, se designó un supervisor para las medidas relacionadas con la COVID-19 en cada obra; su misión consistía en vigilar la conformidad de los empleadores con el acuerdo tripartito sobre “cómo trabajar de manera segura en la construcción”. Sin embargo, según una encuesta de principios de mayo llevada a cabo por el sindicato de la construcción neerlandés —FNV Bouwen & Wonen— en la que participaron más de 1000 trabajadores de este sector, el 36% de los encuestados mencionaba la imposibilidad de cumplir la regla de distanciamiento social de 1,5 metros en las obras, así como la escasez de instalaciones para el lavado de manos que facilitarían la observancia de las nuevas normas. De acuerdo con el 19% de los encuestados, en el momento no había en marcha medidas de protección adicionales. El sindicato ha instado a la inspección del trabajo a que actúe con urgencia con miras a garantizar el cumplimiento del acuerdo tripartito¹⁰.

En España, en julio de 2020, los afiliados de la ICM, la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT-FICA) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO-CS), junto con la confederación de empresarios de la construcción, publicaron una guía para la acción frente a la COVID-19, en previsión de la reanudación de la actividad en el sector de la construcción. En Alemania, en enero de 2021, IGBAU y las asociaciones alemanas de la industria de la construcción, Bau Industrie y Deutsche Baugewerbe, acordaron medidas de prevención adicionales, como distribuir mascarillas médicas FFP2 y realizar más pruebas. Asimismo, instaron al Seguro de Accidentes Estatutario del sector de la construcción, BG-BAU, a que ampliara su oferta de asesoramiento sanitario y asumiera la responsabilidad de controlar el cumplimiento de los protocolos relativos a la COVID-19.

10 Fuente: Erna Bosschart, 6 de mayo de 2020, FNV “Según una encuesta realizada por sus miembros, el protocolo de construcción no se respeta lo suficiente”, disponible en neerlandés en: <https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/bouwen-en-wonen/2020/05/fnv-schakelt-inspectie-s-w-in-protocol-bouw-wordt>



En Turquía, el Sindicato de Empleados de Agricultura, Silvicultura, Ganadería y Medio Ambiente (Tarım Orman-IS) organizó programas de formación en primeros auxilios básicos y prevención de la COVID-19 para los trabajadores forestales de zonas remotas. El sindicato denunció las condiciones de trabajo inseguras y el gran aumento del número de víctimas mortales como consecuencia de la pandemia de COVID-19. El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, Cerámica y Vidrio (CIMSE-IS) también llevó a cabo labores de promoción con las principales empresas del sector para que aplicaran medidas adicionales de salud y seguridad ocupacional, como formar a los trabajadores en los protocolos de seguridad, desinfectar los vestuarios y los espacios comunes periódicamente, tomar la temperatura de los trabajadores a diario y conceder licencias remuneradas a los trabajadores vulnerables, incluidas las mujeres embarazadas.

En Ucrania, los sindicatos han sido proactivos a la hora de exigir que los trabajadores de los proyectos de infraestructuras fundamentales que no interrumpieron sus actividades recibieran los EPP adecuados y contaran con medios de transporte seguros. Por ejemplo, en la ciudad de Lviv, PROFBUD hizo un llamamiento a las autoridades del ayuntamiento y a la policía regional para que garantizaran el suministro de EPP, transporte seguro y desinfectante de manos a los trabajadores de la construcción. Una encuesta realizada por la Confederación de Constructores de Ucrania en junio de 2020 reveló que la mayoría de las empresas habían pospuesto el inicio de nuevos proyectos y que más del 25% de las empresas habían despedido a trabajadores o les habían impuesto una licencia no remunerada, o bien habían reducido las horas y los salarios. PROFBUD estimó que esta pérdida de puestos de trabajo afectó a miles de trabajadores. En Kirguistán, el sindicato organizó un seminario web para informar a los afiliados de las medidas de seguridad. La emergencia de la COVID-19 ha contribuido a reactivar las inspecciones de trabajo que antes habían cesado casi por completo. No obstante, en otros países, como Georgia, el sindicato difundió información sobre las medidas de seguridad para los trabajadores relacionadas con la COVID-19, pero se le impidió acceder a las obras para realizar inspecciones de seguridad.

En África y Oriente Medio, muchos sindicatos utilizaron plataformas de SMS para ponerse en contacto con sus miembros y aconsejarles sobre medidas preventivas, a menudo antes de las respuestas gubernamentales en materia de salud pública. En Sudáfrica, NUM y BCAWU,

afiliados de la ICM, firmaron un acuerdo tripartito en materia de salud y seguridad en la construcción para establecer, entre otras medidas, un comité tripartito de salud y seguridad ocupacional para la COVID-19. En Nigeria, El Sindicato Nacional de Construcción, Muebles y Madera e Ingeniería Civil (NUCECFWW) denunció la inseguridad de las condiciones de trabajo en las instalaciones de la refinería Dangote, en violación de las directivas gubernamentales. En el Estado de Palestina, NUBWW se aseguró de que los empleadores ofrecieran instalaciones de saneamiento y EPP adecuados.

En Zimbabwe, el Sindicato General de Trabajadores de Agricultura y Plantaciones de Zimbabwe (GAPWUZ) firmó un acuerdo con el Gobierno en agosto de 2020 para hacer cumplir una nueva normativa sobre salud y seguridad ocupacional en los sectores de la agricultura y la madera, conocida como Instrumento Legislativo 197 de 2020. El acuerdo abarca a todos los trabajadores, independientemente de su situación laboral, por lo que incluye a los trabajadores estacionales, por contrato y eventuales, y no solo a los fijos. Cuando entre en vigor, reducirá el nivel de exposición a la COVID-19 y llenará un vacío, ya que el convenio colectivo no cubre las cuestiones de salud y seguridad ocupacional y no existe una ley nacional al respecto.

Ese mismo año, a medida que las tasas de infección aumentaban en el continente, la ICM organizó un seminario web regional en línea para África y Oriente Medio el 30 de noviembre dedicado a destacar el impacto psicológico de la COVID-19, en el que se concluyó que los sindicatos deben dar prioridad al tema de la salud mental en los foros de diálogo social.

En Asia y el Pacífico, en Australia, los sindicatos de la construcción y las asociaciones patronales e industriales adoptaron y acordaron las directrices de salud y seguridad ocupacional, aprobadas posteriormente por el Consejo Consultivo de la Industria de la Construcción. Las directrices del estado de Victoria, acordadas con CFMEU y ETU, afiliados de la ICM, se revisaron en varias ocasiones y aportan un enfoque basado en los riesgos para abordar los peligros específicos de cada obra¹¹.

El Consejo de Afiliados Indios ha publicado una carta con diez reivindicaciones en la que se pide que se dote de EPP a todos los trabajadores y se ofrezcan garantías adecuadas en materia de seguridad y salud ocupacional tanto en las obras de construcción como en la silvicultura cuando se reanuden las operaciones. En Corea del Sur, los sindicatos presionaron a las autoridades y a los

11 <https://vic.cfmeu.org.au/news/covid-19-building-industry-guidelines-march-31>

empleadores para que reforzaran las consultas bipartitas sobre salud y seguridad ocupacional, y en Filipinas elaboraron un proyecto con protocolos de salud y seguridad ocupacional para debatirlo con el Gobierno. El Sindicato de Empleados de la Madera de la Península de Malasia (TEUPM) exigió que se llevaran a cabo pruebas obligatorias y periódicas para que los trabajadores forestales no se convirtieran en vectores de transmisión del virus.

En América Latina y el Caribe, algunos países pudieron alcanzar acuerdos bipartitos o tripartitos en materia de seguridad y salud ocupacional, como en la Argentina, donde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) firmó un protocolo en materia de seguridad y salud ocupacional con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), que luego fue refrendado por el consejo consultivo tripartito. El protocolo ofrecía orientaciones detalladas sobre cómo gestionar los riesgos de la COVID-19 y permitir la reanudación del trabajo en el sector. En el Perú, en junio, como parte de los preparativos para la reapertura de la industria tras el confinamiento, la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Madera (FENATIMAP) organizó programas de formación para sus miembros en zonas rurales remotas en materia de protocolos de salud y seguridad ocupacional. La Unión Industrial de Bermudas (BIU) lanzó una campaña de información masiva sobre las medidas preventivas relativas a la COVID-19.



En el Brasil, en agosto, de cara a la reapertura de las obras de construcción y las plantas de trabajo de la madera en muchos estados, los afiliados de la ICM organizaron un seminario web de formación para revisar la propuesta de un protocolo sobre la COVID-19, que se publicó en septiembre. El protocolo, conocido como “La vida antes que las ganancias: recomendaciones para las políticas de salud y seguridad ocupacional en materia de prevención y control de la COVID-19”, está siendo utilizado por los sindicatos para apoyar las negociaciones de los convenios colectivos y las campañas de salud y seguridad ocupacional. SINTRAPAV, Paraná y la empresa Klabin acordaron un estricto protocolo de salud y seguridad ocupacional para poder continuar trabajando en el gran proyecto de procesamiento de celulosa

Puma 11. El diálogo social bipartito entre el Sindicato de Trabajadores de la Construcción Civil de Porto Alegre y el Gobernador del Estado supuso otra buena práctica para desarrollar puntos de cooperación respecto a la reapertura del sector de la construcción, incluidos los protocolos de seguridad y salud ocupacional.

En América del Norte, los sindicatos han sido muy activos en la defensa de la seguridad y la salud. IUPAT, el Sindicato Internacional de Pintores y Comercios Afines, publicó el Plan de Gestión de la COVID-19 en las Obras de Construcción para que los empleadores pudieran garantizar el cumplimiento de las leyes y las mejores prácticas para reducir los riesgos de transmisión. La Asociación Internacional de Trabajadores de Chapa, Aire, Ferrocarriles y Transporte (SMART) elaboró un formulario en línea para informar sobre el incumplimiento de los protocolos relativos a la COVID-19. El Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos Unidos del Canadá dispone de un sitio web similar con un formulario para que los miembros del sindicato puedan escribir cartas o ponerse en contacto con los funcionarios gubernamentales pertinentes para exigir una mejor protección de los trabajadores. El equipo de seguridad del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos lleva a cabo un seguimiento de los trabajadores que han enfermado y vela por que se cumplan los protocolos en las obras. El Sindicato de Trabajadores de la Construcción de la Columbia Británica, un sindicato miembro del Sindicato de Trabajadores de Mantenimiento de la Construcción y Afines de Canadá (CMAW), afiliado de la ICM, elaboró una guía de recursos de prevención sobre la COVID-19 en el sector de la construcción.

3. Zonas críticas de migración y apoyo para los trabajadores migrantes

La pandemia de COVID-19 ha expuesto de forma cruel las brutales desigualdades del mercado laboral mundial, ya que millones de trabajadores migrantes se han visto repentinamente abandonados, sin trabajo, sin ingresos y sin derecho a volver a sus hogares. Los trabajadores migrantes se encuentran entre los más vulnerables, con menos probabilidades de tener acceso a información sobre la enfermedad o a la atención sanitaria. Debido a su condición de migrantes, muchos tienen miedo de pedir ayuda. El Secretario General de la ICM, en un artículo publicado en su blog el 18 de marzo, señaló la falta de protección y los múltiples riesgos a los que se enfrentan los trabajadores migrantes e instó a gobiernos y empleadores a que garanticen que la información relacionada con la COVID-19 esté disponible para los migrantes en varios idiomas y que los servicios de pruebas y de salud se pongan a disposición de todos. Hizo especial hincapié en la grave situación de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), donde las condiciones de hacinamiento y falta de higiene de sus alojamientos provocan altas tasas de infección entre la mano de obra migrante del



LO C19Q
STAND TOGETHER!

BWI stands with the
Peaceful, orderly and genuine elections are
one of the hallmarks of democracy. Whether it
is in our unions or in society in general, free
and fair election is an essential feature of
worker democracy. It is incumbent upon all
workers to rise up and defend it.

Work Safer

**Working on MNC to
Confront Corporate Power**

Beg Bar
The Fu
Emplo
COVI

Top killing workers!
ENOUGH ENOUGH



WORKER POWER IS IN A UNION

and physical
over that
fight to ensure
employment. In
need to target
only by
of social media.

together from afar, together closely
FILCA **CISL** is always with you

**SAFE AT HOME
SAFE AT WORK**

**COVID-19: Amplifying
young voices**

**SAFE AT HOME
SAFE AT WORK**

**Protect Workers
COVID-19**

Protect Workers!

**DECENT
WORK.
BETTER
FUTURE.**

Jobs for All

**How to protect
Trade Union Rights
from the Terror Law?**

**Igual y Mejor
Futuro
para Todos**

21
BWI Women's Calendar
Calendrier des femmes de BWI
Calendario de la ICW para la Mujer

**DECENT, SAFE
PERMANENT**
INTERNATIONAL
YOUTH DAY 2020

Jobs for All

**STOP
RED-TAGGING
TRADE UNIONS**

**STOP
RED-TAGGING
TRADE UNIONS**

**STOP
RED-TAGGING
TRADE UNIONS**

sector de la construcción. En algunos casos, los trabajadores tuvieron que pasar cuarentenas con asistencia financiera y necesidades básicas escasas o nulas.¹²

En julio, la OIT calculó que casi un millón de trabajadores migrantes habían regresado a Asia Meridional y Sudoriental debido a la pandemia de COVID-19. En respuesta al informe, el Secretario General de la ICM instó a los países emisores de mano de obra a preparar medidas de protección social para los millones de trabajadores migrantes desempleados que regresan a sus países. El 24 de julio, la ICM se unió a una coalición de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que reclaman un mecanismo de justicia internacional para los trabajadores migrantes repatriados que supervise las reclamaciones de los trabajadores migrantes respecto al impago de sus salarios. El plan incluía la creación de una comisión internacional de reclamaciones con un fondo de compensación y pedía reformas en los sistemas jurídicos nacionales para atender mejor los problemas de los trabajadores migrantes.

Muchos países de África y Oriente Medio quieren repatriar a los trabajadores, mientras que los países de origen se muestran reacios a permitir su regreso. La ICM, junto con una coalición de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, pidió a los Estados del CCG que se comprometieran a brindar protección y apoyo adecuados a los trabajadores migrantes, también en lo relativo a la seguridad laboral, los ingresos y la atención sanitaria. En Bahrein, la Federación General de Sindicatos de Bahrein (GFBTU) advirtió de que los empleadores despedían a los trabajadores migrantes sin tener en cuenta ni su situación social ni los riesgos para su salud. Intentaron negociar con algunos empresarios y con el Gobierno la ampliación del sistema de subvenciones salariales a los trabajadores migrantes, ya que los migrantes constituyen más del 80% de la mano de obra de la construcción. En Qatar, la red de líderes de trabajadores migrantes de la ICM, el Foro de Líderes de la Comunidad, cooperó con el Ministerio de Trabajo de Qatar para difundir información y sensibilizar sobre cuestiones de salud y derechos laborales; y, con el apoyo de la ICM, pudo distribuir más de 1.000 paquetes de alimentos.

En Singapur, el Gobierno restringió la circulación de unos 370.000 trabajadores migrantes que vivían en albergues donde se habían detectado casos de COVID-19. El Centro de Trabajadores Migrantes, en colaboración con el Congreso Nacional de Sindicatos de Singapur (SNTUC) recaudó fondos para ayudarles.

También hay muchos trabajadores migrantes, incluidos los indocumentados, en países africanos de renta media como Sudáfrica que no tienen derecho a las ayudas de la seguridad social ni a los programas gubernamentales

de transferencias en efectivo. Algunos sindicatos vigilan atentamente las tendencias migratorias y prestan asistencia a través de la ICM y la solidaridad internacional.

En América Latina, las remesas de los trabajadores migrantes representan una importante contribución a muchas economías, especialmente en América Central y el Caribe. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el flujo de remesas en dicha región podría reducirse entre un 10% y un 15% en 2020 y tardar hasta ocho años en volver a alcanzar los niveles de 2019. Miles de migrantes venezolanos, muchos de los cuales trabajaban en el sector de la construcción, han intentado regresar a su país debido al confinamiento decretado en Colombia, a pesar de la difícil situación económica en su propio país.

Los sindicatos de América Latina y el Caribe han intentado garantizar que los trabajadores migrantes puedan acogerse a los programas de asistencia gubernamentales. Por ejemplo, en la Argentina, la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA) publicó una edición actualizada del “Pasaporte Ladrillero”, que contiene información útil para los trabajadores migrantes. En julio, la UOLRA emitió un informe junto con el Instituto de Ciencias Sociales

y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en el que se destaca la situación crítica de los trabajadores informales, muchos de los cuales son trabajadores migrantes estacionales y no reciben subsidios del Gobierno. La presentación en línea del informe tuvo lugar con la participación del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Dr. Claudio Morni. La UOLRA mantiene negociaciones con el Gobierno para incluir a los ciudadanos bolivianos que trabajan en las fábricas de ladrillos cerradas temporalmente, a fin de que puedan acogerse al Ingreso Familiar de Emergencia (conocido como IFE) que garantiza un subsidio familiar durante varios meses.

En América del Norte, los sindicatos reclaman una mayor protección y mejores condiciones de vida para los trabajadores migrantes, así como la cobertura de los gastos sanitarios relacionados con la COVID-19, tanto para los trabajadores documentados como para los indocumentados. Los trabajadores migrantes documentados suelen tener igualdad de acceso a las prestaciones



¹² https://www.bwint.org/es_ES/cms/covid-19-union-response-1689/coronavirus-lucha-contra-la-pandemia-proteccion-a-los-trabajadores-migrantes-1672

relativas a la COVID-19. Sin embargo, en los Estados Unidos, a los trabajadores migrantes con estatus de trabajadores extranjeros temporales les preocupa que aceptar esta ayuda pueda poner en peligro sus posibilidades de renovar sus permisos de residencia, ya que la Administración de Donald Trump añadió un nuevo requisito según el cual los trabajadores migrantes no deben ser una “carga pública”. Los trabajadores indocumentados no tienen derecho a la ayuda de emergencia relativa a la COVID-19 y su situación suele ser crítica. En el Canadá, se ha permitido a los trabajadores migrantes temporales entrar en el país para trabajar a pesar de las restricciones al viaje y los sindicatos señalan que la opinión pública sobre el valor y el estatus de los trabajadores migrantes ha mejorado gracias a su contribución al trabajo de los servicios esenciales.

En los países de la Unión Europea, gran cantidad de trabajadores transfronterizos, desplazados y migrantes disfrutaban, conforme a la ley —si bien no siempre en la práctica—, de igualdad de condición que los ciudadanos nacionales en materia de empleo y protección social. Sin embargo, debido al cierre de fronteras o a las medidas de cuarentena impuestas para los trabajadores que regresan, muchos trabajadores migrantes pasaron a ser considerados ciudadanos de segunda clase, obligados a volver a su país de origen e incapaces de



acceder a los planes de protección del empleo o los subsidios salariales de los países donde trabajaban. Los sindicatos han facilitado información a los trabajadores migrantes en sus idiomas sobre los planes de protección del empleo y subsidios salariales y, cuando ha sido necesario, han reclamado la igualdad de acceso de estos trabajadores a tales planes. Han denunciado que los grupos políticos xenófobos de derechas hayan convertido a los trabajadores inmigrantes y los refugiados en chivos expiatorios de forma oportunista.

Según el sindicato Fellesforbundet, muchos trabajadores migrantes en Noruega volvieron a sus países de origen, pero son objeto de discriminación porque no pueden acceder a las prestaciones por desempleo si no están en Noruega. El sindicato se encuentra negociando con el Gobierno a fin de que estos trabajadores puedan acceder a los mismos beneficios que los

demás cuando regresen. En Francia, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) informó de que algunos trabajadores migrantes estaban viviendo el confinamiento en condiciones muy difíciles, mientras que otros habían regresado a su país de origen y, hasta que se levantaran las restricciones, no podían salir de allí. En Italia, la Federación Italiana de Trabajadores de la Madera, la Edificación, Industrias Afines y Extractivas, miembro de la Confederación General Italiana del Trabajo (FILLEA-CGIL) publicó una carta informativa en varios idiomas explicando las prestaciones a las que podían acceder los trabajadores migrantes durante la crisis de la COVID-19. El sindicato advirtió a los trabajadores migrantes que no abandonaran el país sin notificarlo debidamente a su empleador, ya que tienen derecho a seguir recibiendo una compensación durante un periodo de tres meses. En Portugal, el Gobierno tomó una decisión humanitaria: aprobar todos los procesos pendientes de legalización de extranjeros o solicitantes de asilo durante el estado de emergencia y prorrogar la validez de todos los documentos de permiso de trabajo y residencia. Serbia experimenta dos flujos con respecto a los trabajadores: uno de salida hacia otros países europeos y otro de entrada, procedente en gran parte de Turquía. El Sindicato de Trabajadores de la Construcción e Industria de Materiales de Construcción de Serbia (SRGIGMS) informó de que afronta dificultades para organizar a la mano de obra migrante y que, incluso durante la situación de emergencia ocasionada por la COVID-19, la inspección del trabajo afirmaba no tener autoridad para supervisar las condiciones laborales en las obras dirigidas por empresas extranjeras.

En Ucrania, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Materiales de Construcción de Ucrania (PROFBUD) celebró en Odessa una conferencia de múltiples partes interesadas el 19 de agosto de 2020. Se trató del primer encuentro de este tipo desde el levantamiento de las restricciones del confinamiento y su propósito fue debatir la situación de los trabajadores migrantes ucranianos en los países de la UE. El sindicato destacó que las vulneraciones de los derechos laborales habían aumentado drásticamente a raíz de la COVID-19.

4. Acuerdos Marco Internacionales y participación de empresas multinacionales

El 26 de marzo, el Secretario General de la ICM dirigió una carta a las principales multinacionales del sector de la construcción, sin olvidar a aquellas con las que había suscrito un Acuerdo Marco Internacional, con el fin de promover buenas prácticas en materia de protección de los trabajadores durante la crisis del coronavirus. La ICM instó a las empresas a que reconocieran el deber de cuidado y efectuaran las diligencias debidas en lo referente al conjunto de trabajadores de las empresas y de las cadenas de valor —por ejemplo, en los contratos con los proveedores—, de manera que se priorizaran los derechos y el bienestar de estos trabajadores. ENGIE, empresa de energía francesa que en la actualidad está

negociando un Acuerdo Marco Internacional con la ICM y otros sindicatos mundiales, acordó ampliar una protección social mínima al conjunto de sus empleados en todo el mundo para que cubriera el tratamiento hospitalario completo y un seguro de vida; y extender la cobertura a quienes se encuentran en situación de licencia remunerada hasta finales de año.

Con motivo de la asamblea general anual de LafargeHolcim, la ICM, IndustriALL y la FETCM emitieron una declaración conjunta en la que reivindicaban que la protección del empleo, las garantías salariales y las medidas de salud y seguridad ocupacional se aplicaran a toda la plantilla, trabajadores subcontratados incluidos. Antes de fusionarse con Holcim, Lafarge firmó un Acuerdo Marco Internacional con la ICM, pero hasta la fecha no ha renovado el acuerdo como nueva entidad fusionada. En el Líbano, las fábricas de cemento de la empresa iban a cerrar y los trabajadores no iban a recibir ninguna paga. El Sindicato de Empleados de Servicios Generales del Líbano (GSTU) intervino y firmó un acuerdo con LafargeHolcim para que recibieran la totalidad del salario hasta finales de marzo de 2020 (también los jornaleros). En Marruecos, LafargeHolcim también pagó a los trabajadores su salario íntegro.

En los Emiratos Árabes Unidos, unos 500 trabajadores migrantes procedentes de Nepal publicaron en mayo de 2020 un vídeo en el que protestaban por los malos tratos que recibían a manos de AMB-Hertel y afirmaban que llevaban dos meses encerrados en su alojamiento sin cobrar, que se les negaba el trabajo y que solo recibían algo de comida de la empresa. Ya han muerto algunos trabajadores a causa de la COVID-19, aunque el verdadero alcance de la situación no está claro, ya que estas personas no tienen acceso a servicios médicos. Dada la publicidad internacional que recibió el caso, AMB-Hertel se vio obligada a tomar medidas.

En Sudáfrica, el Sindicato de Trabajadores de la Química, Energía, Papel, Imprenta, Madera y Afines (CE-PPWAWU) plantó cara a Staedtler SA tras el confinamiento porque, en un principio, la empresa planeaba abonar a los trabajadores solo una pequeña parte de sus salarios. El sindicato sudafricano colaboró con la ICM y el afiliado alemán IG Metal para, a través de ellos, denunciar esta infracción del Acuerdo Marco Internacional ante la sede de Staedtler en Alemania. A consecuencia de esto, los trabajadores siguieron recibiendo sus salarios íntegros durante el periodo de confinamiento.

En la India, el afiliado de la ICM en el sector del cemento elevó una instancia ante la Asociación de Fabricantes de Cemento para que se protegieran los empleos y los salarios de los trabajadores, incluidos los temporales. En Asia Meridional, los sindicatos también han presionado a la agrupación de propietarios de canteras de piedra y a determinadas empresas para que los trabajadores sigan recibiendo sus salarios durante el confinamiento provocado por la COVID-19.



En América Latina, los sindicatos han podido recurrir al Acuerdo Marco Internacional firmado con Faber-Castell para conseguir que los trabajadores del Perú y Chile gozaran de protección laboral, subsidios salariales y medidas de seguridad adicionales. En el Brasil, donde las autoridades federales han rechazado las recomendaciones científicas con respecto a la adopción de medidas preventivas, STI Químicos de São Paulo se aseguró de que Faber-Castell instalara controles de temperatura para los trabajadores a la entrada de la planta con el objetivo de aislar a quienes tuvieran fiebre; por otra parte, se concedió una licencia especial a los grupos de riesgo. Además, el sindicato negoció con la empresa para que se establecieran otras medidas de distanciamiento social.

En la región paneuropea, más concretamente en Croacia, los sindicatos ejercieron presión para que la empresa de construcción francesa Bouygues facilitara más equipos de protección personal (EPP) a la plantilla. En Ucrania, en dos fábricas que habían sido propiedad del HeidelbergCement Group, los sindicatos se opusieron con éxito a las medidas que pretendían obligar a los trabajadores a tomar licencias por vacaciones no remuneradas. En su lugar, la empresa aceptó pagar a los trabajadores el 65% de su salario durante el periodo de confinamiento; facilitarles más EPP y servicios de transporte; e instalar un sistema de control de la temperatura a la entrada de la fábrica. En San Petersburgo (Federación de Rusia), un grupo de más de 100 trabajadores migrantes turcos alojados cerca de una obra del centro comercial Mega Dybenko, propiedad de IKEA, contrajeron la COVID-19. La ICM planteó sus inquietudes por las condiciones sanitarias de las obras y los locales de alojamiento de los trabajadores al contratista principal, el Ingka Group de Suecia, que se comprometió a respetar rigurosamente todas las medidas de cuarentena y las directrices sanitarias gubernamentales.

5. Sobre medidas humanitarias

Privados de su empleo y de la seguridad de sus ingresos, muchos trabajadores tuvieron dificultades para mantener su afiliación sindical. Con la fuerte caída de los ingresos que atraviesan los sindicatos, los que tienen menos medios económicos se enfrentan a graves problemas en un momento en el que los recursos son una necesidad imperiosa. Por lo tanto, la ICM puso en marcha el 15 de mayo su iniciativa de fondo de solidaridad ante la COVID-19 para que los afiliados puedan

continuar su labor. El fondo se ha utilizado principalmente para prestar apoyo humanitario a los trabajadores vulnerables —como los migrantes—, y para el desarrollo de capacidades y las tareas relacionadas con la comunicación. La ICM proporcionó un fondo inicial y solicitó contribuciones a sus afiliados y a otras organizaciones de apoyo solidario.¹³ La respuesta ha sido muy positiva: una demostración de la determinación, la unidad y la solidaridad del movimiento sindical.

Los sindicatos han encontrado maneras de apoyar a los servicios de salud pública, a sus integrantes y a otras personas de la comunidad en situación de riesgo. Los afiliados de la ICM en Asia Meridional (Bangladesh, Nepal y la India) y en Asia Sudoriental (Indonesia y Malasia) han distribuido paquetes de alimentos a los miembros y a tra-



bajadores migrantes indigentes. Por ejemplo, el TEUPM facilitó asistencia humanitaria a los migrantes de Nepal, Bangladesh y Myanmar que trabajaban en la industria de la madera y la silvicultura de la región de Klang. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Madera de Sabah (STIEU) entregó paquetes de comida al personal de los centros de trabajo de Tawau; aquí, la mayoría de los trabajadores son también migrantes procedentes de Nepal, Bangladesh e Indonesia, empleados en régimen de “sin trabajo no hay sueldo”. El sindicato criticó a los empresarios por no haber apoyado a su plantilla durante el confinamiento y afirmó que la ayuda humanitaria de la ICM había cubierto una carencia importantísima. En Filipinas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción e Infraestructura (NUBCW) visitó diversos albergues de trabajadores en Manila para repartir víveres entre los que se dedicaban a la construcción. Los empleadores habían abandonado durante el confinamiento a estas personas, que tampoco recibían ayudas del Estado.

El fondo de solidaridad de la ICM y las propias contribuciones de los sindicatos también se tradujeron en una ayuda muy necesaria en la región de África y Oriente Medio. El Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Mauricio (CMWEU), junto con la central nacional de la Confederación de Trabajadores de los Sectores Público y Privado, proporcionó paquetes de alimentos a 44 migrantes indios que trabajaban para Swadeshi Pvt Let (una empresa de construcción de la India que opera en Mauricio)

y no habían recibido su salario. En el Senegal, el SNTC/BTP se reunió con Eiffage Senegal; la empresa accedió a triplicar la contribución sindical, de modo que la empresa y el sindicato aportaron 30 y 10 millones de francos CFA, respectivamente, a fin de costear los paquetes de alimentos destinados a 3.000 trabajadores necesitados. En otros países de África Occidental, los sindicatos cooperaron con las organizaciones no gubernamentales (ONG) para llevar a cabo acciones humanitarias encaminadas a ayudar a los trabajadores informales que se encontraban en una situación precaria. En la región de Oriente Medio y Norte de África, la FGBB de Túnez, junto con la central sindical nacional UGTT, exhortó a las empresas a que revocaran las notificaciones de despido de los trabajadores y a que crearan un fondo en respuesta a la COVID-19 para ayudar a los que habían contraído la enfermedad. En Egipto, el GTUBWW realizó una contribución económica al fondo Viva Egipto para familias vulnerables. En Bahrein, Jordania y el Líbano, los sindicatos han hecho su aportación a los fondos humanitarios y han distribuido paquetes de alimentos entre los trabajadores necesitados..

En la región de América Latina y el Caribe, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú negoció con la Cámara Peruana de la Construcción para garantizar que todos los trabajadores informales del sector recibieran la ayuda especial en metálico proporcionada por el Gobierno. Muchos otros sindicatos —como UOLRA en la Argentina, FENTICOMMC en la República Dominicana, SINCS-G en Guatemala, SUNTRACS en Panamá, SUNCA y SOIMA en el Uruguay— distribuyeron paquetes de alimentos y artículos de aseo a los afiliados y sus familias. Por ejemplo, el SINCS-G pudo proporcionar alimentos y material sanitario a 50 familias indigentes con la ayuda del fondo de solidaridad de la ICM. Muchos trabajadores de la construcción habían perdido sus empleos en los Estados Unidos de América y habían regresado a su país sin perspectivas laborales. En Chile, el sindicato afiliado a la ICM en la planta de MASISA Mapal, en la región de Biobío, pudo entregar alimentos y medicamentos a los trabajadores migrantes de la industria de la madera procedentes de Venezuela y Colombia y a sus familias. La empresa contratista había recortado los sueldos y las horas de trabajo debido a la desaceleración económica causada por la pandemia de COVID-19.

En América del Norte, la IAMAW ofreció asistencia para encontrar a los miembros del sindicato sin trabajo y las fábricas cerradas que podrían reabrirse y producir material sanitario. En el Canadá, USW unió fuerzas con otras organizaciones para apoyar a los trabajadores del Sur Global en riesgo de perder sus empleos, como en el caso de los trabajadores de la confección que desarrollan su actividad en la cadena de suministro de los Estados Unidos, en Honduras, Bangladesh y otros países.

13 https://www.bwint.org/es_ES/cms/act-now-69/icm-lanza-iniciativa-solidaria-covid-19-1834

La región paneuropea también fue testigo de un buen número de ejemplos de solidaridad mundial y respaldo a los trabajadores esenciales. En Serbia, con ayuda del fondo de solidaridad de la ICM, el SRGIGMS proporcionó EPP en julio a la plantilla de la fábrica de ladrillos Sloga IGM S. A. en Novi Pazar, ya que seguían trabajando sin la protección adecuada. YOL-IS, el sindicato turco de trabajadores de obras de carretera y de la construcción, puso sus hoteles, pensiones e instalaciones sociales a disposición de los trabajadores de la sanidad pública en varias ciudades a fin de que pudieran hospedarse cerca de los hospitales y de esa forma reducir el riesgo de infección en sus hogares. Por otra parte, la Dirección General Forestal de Turquía impuso a los trabajadores la obligación de contribuir con un tercio del salario de un mes a un fondo gubernamental en respuesta a la COVID-19 y amenazó a quienes se negaran. TARIM ORMAN-IS presentó una queja formal encaminada a proteger los derechos de los trabajadores.

Los trabajadores de la construcción han proseguido con las reparaciones de las casas y otros edificios para la gran cantidad de personas que, tras los terremotos de Albania en noviembre de 2019 y Croacia en marzo de 2020, se habían quedado sin techo y vivían en tiendas de campaña. Pese a las malas condiciones meteorológicas y a la necesidad de tomar medidas adicionales para protegerse de la COVID-19, el trabajo siguió adelante. El sindicato SGH informó de dos accidentes mortales durante las reparaciones de tejados en Zagreb (Croacia) en abril. En honor a los trabajadores fallecidos, el sindicato reclamó medidas urgentes de mejora de las normas de seguridad y salud ocupacional con el fin de garantizar un trabajo seguro.

6. Sobre organización y retención de miembros

Debido a las restricciones de viaje y a la prohibición de celebrar reuniones, los sindicatos se han enfrentado a muchos problemas organizativos, como la necesidad de posponer las negociaciones de nuevos convenios colectivos y las dificultades para convocar acciones de protesta o huelgas.

La ICM y sus afiliados han intentado asegurar la puesta en marcha de mecanismos eficaces de información, consulta y adopción de decisiones. A partir de marzo, la ICM convocó una serie de reuniones regionales o subregionales periódicas en línea bajo el título “Hola, ¿qué tal?” para comentar las repercusiones de la COVID-19 y para poner en común experiencias y estrategias sobre las negociaciones con los empleadores y los gobiernos en temas como la seguridad laboral y la protección de los ingresos, el acceso a los servicios de salud y las medidas de seguridad y salud ocupacional. Por ejemplo, en Asia Meridional, el Secretario General de la ICM y el



Vicepresidente de Asia y el Pacífico pudieron reunirse el 1 de junio en una teleconferencia digital con más de 200 líderes sindicales de la subregión. Estos últimos dieron a conocer información sobre la situación actual de los trabajadores de varios sectores, como la construcción, el cemento, las fábricas de ladrillos y los productos derivados de la pequeña silvicultura. También hablaron de la labor en la que se han embarcado para prestar apoyo a los miembros y a los trabajadores en general, sin olvidar a los migrantes. Acordaron seguir colaborando para oponerse a las medidas y políticas contrarias a los intereses de los trabajadores que sus gobiernos han aprobado con el pretexto de luchar contra la COVID-19.¹⁴ El 2 de junio, el Secretario General de la ICM y el Vicepresidente de América Latina y el Caribe se reunieron con líderes sindicales de 15 países en un foro en línea para analizar la situación e intercambiar ejemplos del papel fundamental del diálogo social y la negociación colectiva en la defensa de los subsidios salariales y la protección del empleo.¹⁵

Los sindicatos establecieron redes de información por medio de redes sociales, teléfonos de asistencia y mensajes SMS con el objetivo de mantener a sus miembros informados de la situación de salud general y la repercusión de las medidas gubernamentales en el lugar de trabajo, así como del modo de acceder a los distintos planes de compensación públicos. Además, en muchos casos, los servicios de información y asesoramiento se ofrecieron en los idiomas más comunes entre los trabajadores migrantes. Por medio de las nuevas tecnologías, los sindicatos han organizado reuniones estratégicas y seminarios web para coordinar las respuestas ante la COVID-19. Por ejemplo, en Rwanda, STECOMA decidió recurrir a la radio FM, la televisión y los mensajes SMS para comunicarse con sus miembros. También ha desarrollado servicios en línea para ayudar a los miembros a celebrar reuniones

14 https://www.bwint.org/es_ES/cms/priorities-10/rights-34/youth-41/news-42/200-sindicalistas-se-unieron-al-seminario-web-sobre-covid-19-de-la-icm-en-el-sur-de-asia-1865

15 https://www.bwint.org/es_ES/cms/priorities-10/rights-34/youth-41/news-42/dialogo-social-y-negociacion-colectiva-se-destacan-en-el-seminario-web-de-la-icm-sobre-el-covid-19-en-alc-1869

a través de Internet y lanzar campañas de información virtuales. MANWU, de Namibia, insta a sus miembros a que conecten entre sí por medio de las redes sociales.

Muchos sindicatos tuvieron que aplazar los congresos y convenciones que estaban previstos. En su lugar, crearon mecanismos alternativos que otorgaran a los miembros la oportunidad de presentar resoluciones y enmiendas constitucionales, así como mecanismos para los procedimientos de nominación y votación en línea.

Los sindicatos también han mantenido el contacto con los afiliados asesorándolos sobre las medidas de seguridad y prestándoles asistencia práctica, como la distribución de mascarillas. La organización de la ayuda humanitaria y de los paquetes de alimentos para los trabajadores que perdieron su empleo y sus ingresos de manera súbita fue también una forma de que los sindicatos siguieran siendo importantes en la vida cotidiana de los miembros y sus familias, y contribuyó a la retención de afiliados. De hecho, en algunos países, sindicatos como UNITE (Reino Unido) han visto cómo aumentaba la membresía.

La Confederación Europea de Sindicatos publicó unas orientaciones sobre el funcionamiento de los Comités de Empresa Europeos durante la crisis de la COVID-19 y recomendó que se celebraran reuniones extraordinarias por videoconferencia para tratar la situación. La organización señaló a modo de recordatorio que no puede tomarse ninguna decisión sobre reestructuraciones, reducción de personal o pérdida de puestos de trabajo sin antes informar, consultar e implicar a los trabajadores y representantes sindicales. Se instó a los delegados de los Comités de Empresa Europeos a difundir información sobre la situación en cada uno de los países en los que opera la empresa y a solicitar a la directiva actualizaciones periódicas sobre la pandemia por escrito y para cada país.

Debido al alto porcentaje de trabajadores informales en el sector de la construcción, muchos sindicatos decidieron ampliar la asistencia a todos los trabajadores aunque no tuvieran un contrato de trabajo registrado. Algunos han ofrecido afiliación sindical gratuita o cupones sindicales a quienes están temporalmente en paro.

Matriz de medidas relacionadas con las 7 convergencias de la ICM

Convergencia de la ICM Resumen de medidas y resultados relativos a la pandemia de COVID19



En su respuesta a la pandemia de COVID-19, los sindicatos emplearon un marco basado en los derechos y con la filosofía de que nadie debe quedarse atrás. Denunciaron categóricamente los intentos de las autoridades o de los empresarios de debilitar la legislación laboral o de incumplir los convenios colectivos. Los sindicatos han participado en mayor o menor medida en la redacción de los planes gubernamentales, o firmado acuerdos bipartitos o tripartitos para la retención del empleo durante el período de confinamiento que incluían, entre otras disposiciones, moratorias de los despidos o los permisos no retribuidos; planes de subsidios salariales para las empresas que retengan a los trabajadores durante este período; y la ampliación de los fondos de desempleo con el objetivo de abarcar a una mayor cantidad de grupos de trabajadores, incluidos los migrantes, los que tienen contratos temporales y otros grupos vulnerables, como los trabajadores con discapacidad. También se unieron a otras organizaciones de la sociedad civil para abogar por medidas especiales para proteger los ingresos de los trabajadores por cuenta propia o facilitar transferencias en efectivo a los más vulnerables. Además, informaron a los trabajadores acerca de sus derechos en lo tocante a la COVID-19 y la salud y la seguridad en los centros de trabajo.



Los sindicatos se movilaron para reclamar nuevos protocolos o directrices sectoriales en materia de salud y seguridad ocupacional con el propósito de proteger a los trabajadores durante la emergencia ocasionada por la COVID-19; aquí se engloba la divulgación de información sobre el virus y la mejora de las medidas de seguridad en los lugares en los que no se interrumpió la actividad y en los que la retomaron con el tiempo. Adoptaron medidas de seguridad y salud ocupacional en la empresa y en las obras, y han realizado un seguimiento de su cumplimiento mediante la designación de delegados in situ que se centran en el coronavirus. Cuando fue necesario, los sindicatos actuaron con prontitud para denunciar las condiciones de trabajo inseguras ante las autoridades locales y las inspecciones de trabajo, y estuvieron pendientes de la reacción del gobierno y la patronal a los informes de las personas que revelaron la existencia de condiciones inseguras.



Las estructuras sindicales juveniles y los comités de la juventud de la ICM promovieron una mayor conciencia sobre las secuelas económicas y sociales de los despidos y el papel crucial que desempeñan los sectores de la ICM en lo que respecta a absorber el desempleo juvenil. Organizaron reuniones virtuales para coordinar campañas de información sobre los distintos mecanismos vigentes de apoyo sanitario y económico y celebraron una serie de seminarios web para dar más voz a los trabajadores en este grupo demográfico. Se hizo hincapié en el uso de las redes sociales para dar a conocer las campañas; entre ellas, una titulada "Anteponer la vida a los beneficios" y dirigida especialmente a los jóvenes en Asia y el Pacífico. En muchos países, los aprendices se han visto afectados por el cierre de las escuelas de capacitación profesional. En algunos Estados, formaban parte de los planes de protección del empleo y subsidios salariales, y los sindicatos ejercieron presión para garantizar que los aprendices siguieran recibiendo todas las prestaciones de capacitación; también hicieron un llamamiento para que los cursos de formación pasaran a impartirse en línea en lugar de cancelarse. Numerosos sindicatos instaron a los gobiernos a promover los programas de prácticas con miras a favorecer la recuperación económica.



Las mujeres embarazadas constituyen uno de los grupos de trabajadores en situación de riesgo especial durante la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. En algunos países, los sindicatos han negociado licencias remuneradas para los trabajadores en situación de riesgo. Los Comités de Mujeres de la ICM exigieron que se incluyera a representantes de las mujeres en todas las negociaciones y la planificación de la respuesta ante la COVID-19. Las estructuras sindicales femeninas reaccionaron con rapidez y distribuyeron información sobre, entre otras cuestiones, cómo acceder a los diversos fondos públicos de asistencia social. Algunos sindicatos abogaron por la mejora de los servicios de guardería habida cuenta de las responsabilidades añadidas en cuanto a cuidados que las mujeres soportaron durante el confinamiento. También han planteado su preocupación por el aumento de los feminicidios y los casos de violencia doméstica a raíz del confinamiento, han demandado a los gobiernos que tomen cartas en el asunto y han desplegado campañas para pedir la ratificación del Convenio sobre la violencia y el acoso (núm. 190) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



El 15 de abril, el Presidente de la ICM, Per-Olof Sjö, instó a que los planes de recuperación gubernamentales se centraran en la creación de economías sostenibles. La Declaración de la ICM sobre la COVID-19 “Construir un mejor futuro: Resistencia frente a la adversidad a través de la sindicación” (que fue aprobada por el Comité Mundial en mayo y junio de 2020) presenta una hoja de ruta hacia la recuperación inclusiva, equitativa y que contribuye a un futuro sostenible. El 9 de noviembre, la ICM organizó un seminario web sobre “el futuro del trabajo” para analizar el efecto de la pandemia y las perspectivas de empleo y salarios. Se retransmitió por Facebook y lo siguieron 6.600 personas. En Europa, las asociaciones de los sectores de la madera y la fabricación de mobiliario publicaron el 24 de abril una declaración conjunta con la FETCM en la que señalaban, por un lado, que la madera y los productos derivados de esta eran la base más idónea para una economía circular y orientada al reciclado; y, por otro, que la contratación pública centrada en la construcción con madera de bajas emisiones de carbono desempeñaría un papel crucial en la recuperación verde europea. En abril, los sindicatos hicieron declaraciones con motivo del Día de la Tierra y se sumaron a las protestas contra el cambio climático el 15 de mayo de 2020. Han preparado respuestas normativas para la recuperación económica desde una perspectiva ecológica que exigen que los proyectos de infraestructura pública cubran las necesidades sociales y que haya una transición justa hacia economías sostenibles y neutras en cuanto a emisiones de carbono.



En Qatar, la ICM se coordinó con la Confederación Sindical Internacional, la OIT y las autoridades del país para definir y organizar intervenciones sobre el terreno dirigidas a los trabajadores migrantes afectados por la COVID-19. La organización recurrió a las redes de migrantes empleados en las obras de la Copa del Mundo de 2022 (dichas redes cuentan con el apoyo de la ICM) para suministrar paquetes de alimentos a los trabajadores confinados y realizó una inspección virtual para evaluar las medidas de seguridad para los empleados que aún se encontraban en las obras y de los albergues en los que vivían. La ICM también participó en un comunicado conjunto a instancias de la Open Society Foundation y Humanity United en la que se pedía a Qatar y a otros países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) que brindaran asistencia para paliar las dificultades que atravesaban los trabajadores migrantes. En mayo de 2020, el Comité de los Juegos Olímpicos de París, SOLIDEO, reiteró su compromiso con la carta social de 2018 suscrita por cinco sindicatos y asociaciones industriales, y manifestó que la crisis ocasionada por la COVID-19 no daría pie a un retroceso en las normas ambientales y sociales. En julio de 2020, la ICM celebró un seminario web a escala mundial sobre el empoderamiento de las personas migrantes, con especial atención a los trabajadores en Qatar, en el que se reivindicó un nuevo pacto social sobre la migración laboral.



El 26 de marzo, la ICM instó a las empresas multinacionales a que reconocieran su deber de cuidado y efectuaran las diligencias debidas en lo referente al conjunto de trabajadores de las empresas y de las cadenas de valor —por ejemplo, en los contratos con los proveedores—, de manera que se garantizaran sus derechos y bienestar. ENGIE, empresa de energía francesa que en la actualidad está negociando un Acuerdo Marco Internacional con la ICM y otros sindicatos mundiales, acordó ampliar una protección social mínima al conjunto de sus empleados en todo el mundo para que cubriera el tratamiento hospitalario completo y un seguro de vida; y extender la cobertura a quienes se encuentran en situación de licencia remunerada hasta finales de año. Las regiones de la ICM convocaron encuentros sectoriales en línea para renovar las estrategias de sindicalización en las multinacionales. En vísperas de la asamblea general anual de LafargeHolcim, la ICM, IndustriALL y la FETCM emitieron una declaración conjunta en la que reivindicaban que la protección del empleo, las garantías salariales y las medidas de salud y seguridad ocupacional se aplicaran a toda la plantilla, trabajadores subcontratados incluidos. Los afiliados de la ICM en el sector del cemento también han instado a las Asociaciones de Fabricantes de Cemento que protejan a todos los trabajadores, sin olvidar a los temporales. Además, los sindicatos han presionado a las agrupaciones de propietarios de canteras de piedra con la finalidad de que los trabajadores sigan recibiendo sus salarios durante el confinamiento provocado por la COVID-19.

Perspectivas en los sectores de la ICM

1. Construir un mejor futuro: las prioridades de los trabajadores y las actuaciones para la recuperación tras la pandemia

La pérdida de millones de puestos de trabajo y el hecho de que muchos millones más corran el riesgo de desaparecer ha alterado drásticamente la voz de los trabajadores. Los sindicatos son conscientes de la necesidad de transformarse y revitalizarse, ya sea ampliando su ámbito de actuación, mejorando los canales de comunicación y los métodos y estructuras de organización, o perfeccionando su capacidad para llegar a las mujeres trabajadoras y los trabajadores migrantes y más vulnerables, como las personas con discapacidad. En todos estos ámbitos, la movilización de los jóvenes trabajadores será crucial.

La ICM y sus afiliados sostienen que la recuperación no consiste únicamente en generar más puestos de trabajo, sino que debe significar la creación de empleos de mayor calidad y más seguros y de sociedades mejores. Con la adopción del marco “*Construir un mejor futuro: Resistencia frente a la adversidad a través de la sindicación*”, la ICM reclama un nuevo camino inclusivo y equitativo hacia la recuperación que garantice la integración de la equidad de género en todas las respuestas orientadas a la recuperación y que se centre en la transformación que conduce a una economía más ecológica y limpia.¹⁶ La FETCM también anunció una serie de exigencias para orientar sus prioridades y lograr una recuperación sostenible.¹⁷ Los sectores de la ICM serán vitales para la recuperación posterior a la crisis de la COVID-19 al crear puestos de trabajo de valor añadido y contribuir a la reactivación de las economías locales. Si tenemos en cuenta que las emisiones de dióxido de carbono del sector de la construcción equivalen casi al 40% de las emisiones mundiales relacionadas con la energía y los procesos, también es una oportunidad para avanzar mucho más rápido hacia una economía neutra en cuanto a emisiones de carbono y que tenga sus cimientos en un entorno construido de forma sostenible y una transición justa.¹⁸

Muchos gobiernos están estudiando cómo plantear los paquetes de estímulo para sustentar la recuperación económica y, al mismo tiempo, cumplir los objetivos de reducción de las emisiones de dióxido de carbono.¹⁹ La inversión en infraestructura pública será un elemento crucial. Las carreteras, las viviendas de nueva construc-

ción y los proyectos de renovación que utilizan materiales y diseños sostenibles pueden servir de base para los programas de recuperación económica. Ya hemos visto numerosos ejemplos de implicación sindical en lo tocante al periodo de recuperación posterior a la COVID-19. Los sindicatos colaboran con los foros nacionales tripartitos de la industria para dar forma a las respuestas de las autoridades e impulsar los programas de reconversión industrial. Han pedido la formación de Consejos Nacionales de Recuperación basados en un modelo tripartito y sostienen que se debe dar prioridad a los proyectos de construcción que requieren mucha mano de obra y a los proyectos de reforestación que tienen que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al abordar las necesidades sociales, generar condiciones laborales adecuadas y proteger la seguridad y salud ocupacional. A corto plazo, los proyectos descentralizados para el mantenimiento de la infraestructura, el revestimiento y el reacondicionamiento para mejorar la eficiencia energética —prestando especial atención a los hogares más

Declaración de la ICM sobre la COVID-19: Resistencia frente a la adversidad a través de la sindicación

Ocho prioridades

1. Aumentar la seguridad en el trabajo mediante la priorización de la seguridad y salud ocupacional.
2. Proteger los salarios y garantizar el empleo.
3. Defender los derechos económicos, políticos y laborales de los trabajadores migrantes.
4. Promover la incorporación de la perspectiva de género en respuesta a la crisis y la equidad de género en la recuperación, así como también considerar la violencia por razones de género como un problema de los trabajadores.
5. Dirigir el amparo del sector forestal y su cadena de valor.
6. Hacer responsables a las multinacionales por las condiciones laborales y los empleos, además de exigir que las corporaciones contribuyan de manera significativa a la recuperación.
7. Abogar por la solidaridad global y la cooperación internacional para abordar la deuda soberana y la recuperación mundial.
8. Construir el futuro posterior a la pandemia, un futuro verde y que ofrezca justicia social.

¹⁶ Declaración de la ICM sobre la COVID-19: Resistencia frente a la adversidad a través de la sindicación, junio de 2020.

¹⁷ “26 concrete demands to direct EFBWW priorities in the coming 12 months” (26 exigencias concretas para orientar las prioridades de la FETCM en los próximos 12 meses).

¹⁸ Declaración conjunta de la Federación de la Industria Europea de la Construcción, la Confederación Europea de Constructores y Construction Products Europe: “European Recovery Fund: The construction ecosystem as priority with at least €320B dedicated budget”, 30 de abril de 2020. Disponible en: <http://www.fiec.eu/en/cust/documentrequest.aspx?DocID=48672>

¹⁹ Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). “Adopting decarbonisation policies in the building and construction sector: Costs and benefits”, 2019. Disponible en: <https://globalabc.org/resources/publications/adopting-decarbonization-policies-buildings-and-construction-sector>

pobres — son proyectos listos para iniciarse que exigen una plantilla relativamente numerosa y que pueden pasar a estar operativos en muy poco tiempo. A más largo plazo, los gobiernos pueden planificar proyectos de infraestructura y vivienda social de mayor envergadura, centrándose en particular en la infraestructura de salud pública —que, como se demostró durante la crisis, es insuficiente en grado sumo— y en proyectos de vivienda social y servicios básicos de agua y saneamiento para mejorar los asentamientos informales superpoblados y los alojamientos para migrantes donde la COVID-19 se propagó rápidamente. Dichos proyectos deben equilibrarse con otros más pequeños de infraestructura rural y social que favorezcan a las empresas nacionales y vayan acompañados de más programas sociales, como prestaciones de apoyo a la renta básica para las personas más vulnerables.

En Sudáfrica, el NUM ha planteado al Ministro de Obras Públicas cuestiones relacionadas con la crisis del sector de la construcción y participa en un equipo de trabajo de respuesta rápida ante la COVID-19 para estudiar la recuperación de la industria de la construcción tras el confinamiento. En Namibia, MANWU ha argumentado que la consulta tripartita será decisiva para la formulación de planes de recuperación, aunque hasta ahora el Gobierno no ha tenido ninguna interacción de importancia con los sindicatos.

En Australia, la CFMEU, el ETU y Master Builders of Australia han pedido al Ejecutivo nacional un paquete de estímulo a la vivienda social de 10.000 millones de dólares australianos. En Nueva Zelanda, el desarrollo de la infraestructura se considera ahora un aspecto fundamental de la recuperación económica del país, con una asignación presupuestaria adicional de 15.000 millones de dólares neozelandeses. Además, las autoridades han destinado 1.600 millones de dólares neozelandeses a programas de formación profesional gratuitos para los trabajadores. En la India, la ley nacional de garantía del empleo rural ha recibido fondos suplementarios para generar puestos de trabajo en infraestructura, sobre todo para ayudar a paliar la sequía. En Indonesia, los afiliados de la ICM han participado en la planificación y el seguimiento de los planes de recuperación fiscal y monetaria.

En los Estados Unidos de América, el IUPAT ha defendido la aprobación de medidas de ayuda con motivo de la COVID-19 y la inversión en infraestructura de forma que se recurra a trabajadores cualificados sindicalizados, con un salario justo y protocolos sólidos en materia de seguridad y salud ocupacional. La ley de protección del derecho a

la sindicación, conocida como Pro ACT, volvió a presentarse en el Congreso en febrero de 2021, y si se aprueba, será la primera reforma de la legislación laboral en casi un siglo. Esta ley pretende dar más poder a los trabajadores durante los conflictos, reforzar las sanciones contra las empresas que tomen represalias contra la plantilla y restablecer los derechos laborales básicos de millones de trabajadores que actualmente están en una categoría errónea. El plan de “rescate” frente al coronavirus de la Administración Biden —que asciende a 1,9 billones de dólares de los Estados Unidos— incluye algunas disposi-



ciones relacionadas con la construcción, y está previsto que otra propuesta de recuperación económica, conocida como “Build Back Better” (Reconstruir Mejor), financie proyectos de infraestructura a largo plazo.

En la Unión Europea, los sindicatos se han unido a alianzas de base amplia integradas por políticos de todos los partidos, empresas y personas influyentes del sector financiero para reivindicar un Pacto Verde de recuperación que estimule los planes de acción y las inversiones necesarias a nivel local, nacional y regional tras la crisis de la COVID-19. En octubre de 2020, la Unión Europea puso en marcha su nueva estrategia, “Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas”, con el objetivo de duplicar los índices anuales de renovación energética en los próximos diez años, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el continente y crear hasta 160.000 empleos verdes adicionales en el sector de la construcción.²⁰ La FETCM acogió con satisfacción la publicación de dicha estrategia y exhortó a los gobiernos a que invirtieran en proyectos de contratación pública orientados a la construcción con madera de bajas emisiones de carbono.²¹

La alianza Construction 2050 Alliance, que engloba a representantes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, los gobiernos nacionales y los sindicatos, se reunió en diciembre de 2020 para reiterar que el entorno construido ha de ser una prioridad fundamental en los planes de recuperación de todos los países.²² La FETCM y las asociaciones europeas de los sectores de la madera y la fabricación de mobiliario han desta-

20 European Commission ‘A renovation wave for Europe- greening our buildings, creating jobs, improving lives’, 14 Oct. 2020, available at <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1603122220757&uri=CELEX:52020DC0662>

21 EFBWW, CEI-Bois, FEP, EOS and EPF ‘Joint Position Paper on the Renovation Wave’ 6 November 2020 available at: <https://www.efbww.eu/news/joint-position-paper-on-the-renovation-wave/1409-a>

22 Construction 2050 Alliance ‘Construction in national recovery plans’ 7 December 2020 available at <https://www.efbww.eu/news/construction-alliance-2050-construction-in-national-recovery-pla/1569-a>

cado la importancia de la madera y los productos madereros como la base más adecuada para una economía circular y orientada al reciclaje, y también recordaron los compromisos del Plan de Acción para la Economía Circular de la Unión Europea²³

En febrero de 2021, el Parlamento Europeo aprobó su Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que abarca préstamos y subvenciones por valor de 672.500 millones de euros. Cada Estado miembro debe presentar planes de inversión destinados a generar empleo y crecimiento dando prioridad a las inversiones y reformas climáticas y al respaldo a la transición digital.

Tanto a nivel regional como nacional, los sindicatos también reclaman que, para apoyar la recuperación económica, se invierta en programas fácilmente accesibles de formación, recualificación y perfeccionamiento, sin olvidar los programas de aprendizaje en el empleo. En algunos países, las autoridades ya han clasificado la construcción como sector prioritario y han asignado fondos adicionales a los programas de formación profesional para los oficios de la construcción. Los sindicatos han apoyado llamamientos a los gobiernos para que creen programas de aprendizaje en empleos verdes que preparen a los jóvenes para trabajar en el ámbito de las energías renovables, el aislamiento de viviendas y la regeneración de bosques. Los sindicatos han abogado por desempeñar una función clara en la supervisión de los programas de aprendizaje en el empleo y por que haya medidas para promover que las mujeres jóvenes accedan a nuevas oportunidades de capacitación.

Muchos sindicatos también han exigido que se apliquen nuevas medidas estrictas a los paquetes gubernamentales de estímulo para las empresas, de modo que no solo estén supeditados a la protección del empleo, sino que esas empresas no declaren sus beneficios en paraísos fiscales ni repartan dividendos a los accionistas o primas a los altos cargos mientras los trabajadores se enfrentan a una reducción de salarios e ingresos. Las ayudas públicas pagadas con impuestos que se conceden a las grandes empresas deben condicionarse a que mejoren de forma constatable sus resultados en materia de desarrollo sostenible, de forma que tengan un efecto positivo en las condiciones de trabajo adecuadas, el medio ambiente y las comunidades locales.

Los sindicatos también han pedido que se reformen los sistemas de contratación pública y de licitación en general para que la oferta más baja no siempre sea la ganadora. La ICM demandó una revisión del sistema de licitación

Agenda de la ICM para la recuperación tras la pandemia

Los sindicatos pueden hacer campaña y presionar a sus gobiernos sobre los siguientes temas:

1. Inversión pública

- Los gobiernos deben adoptar medidas ambiciosas de estímulo para la inversión pública en actividades que requieran mucha mano de obra, como infraestructura, carreteras, proyectos de vivienda, escuelas e instalaciones sanitarias.
- Los gobiernos garantizarán que las condiciones del préstamo de los fondos de estímulo sean justas y no pongan en riesgo el crecimiento sostenible a largo plazo.

2. Transición a una economía más verde y limpia

- Los gobiernos deben dar prioridad a la renovación y adaptación de los edificios y a los proyectos de infraestructura verde con materiales de construcción renovables para reducir las emisiones de carbono.
- Los gobiernos deben hacer lo posible por que la transición sea justa para los trabajadores de los sectores que puedan verse afectados; para ello, crearán programas de reciclaje profesional y apoyo al empleo.

3. Trabajos decentes, seguros, ecológicos y sindicalizados

- Los gobiernos deben erradicar las desigualdades sociales. Para ello, velarán por que todos los puestos de trabajo ofrezcan unas condiciones laborales decentes: un salario digno, seguridad en el empleo y acceso a una protección social completa.
- Las autoridades han de garantizar entornos de trabajo seguros y, conforme al Convenio de la OIT, reconocer la seguridad y salud ocupacional como un derecho fundamental.

4. Inclusión social

- Los gobiernos tienen que seguir promoviendo medidas de equidad para luchar contra la discriminación en el empleo a la que se enfrentan las mujeres, los migrantes, los jóvenes y otros grupos vulnerables.

5. Participación sindical sustancial

- Los gobiernos velarán por que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores a la libertad de asociación y a la negociación colectiva.
- Los gobiernos deben fomentar que se produzca un diálogo social fructífero sobre todos los planes de recuperación económica y social.

Fuente: Seminario web de la ICM acerca de la recuperación tras la pandemia, 24 de febrero de 2021.

y el establecimiento de nuevos criterios con respecto a la relación entre calidad y precio y los servicios para que los clientes, los organismos reguladores y las instituciones financieras otorguen un valor especial a la contratación responsable a la hora de seleccionar las propuestas ganadoras. Los sindicatos han argumentado que deberían participar en la supervisión de las licitaciones y concursos para asegurarse de que haya suficientes garantías de

²³ EOS, EIB, EFIC, EFP & EFBWW, UEA 'Covid-19: To fight the Corona pandemic the European Wood and Furniture Industries propose measures to protect the workers' health, support economic activity and the sector's recovery' 24 April 2020 available at: <https://www.efbww.eu/publications-and-downloads/press-releases/covid-19-efbww-info-from-and-for-efbww-affiliates/481-a>

la protección de los derechos de los trabajadores y su seguridad y salud ocupacional.

También plantearon otra cuestión por la que ha de ejercerse presión: el papel de las instituciones financieras multilaterales. Por ejemplo, en los países que han recibido préstamos de emergencia de la Comisión Europea o del Fondo Monetario Internacional (FMI), como en el caso de Albania, Bosnia y Herzegovina y Macedonia del Norte, los sindicatos han expresado su preocupación por el hecho de que, sin reformas políticas de gran calado, estos préstamos solo contribuirán a empeorar los problemas existentes de corrupción y de falta de transparencia en la contratación pública y acelerarán la emigración de la mano de obra. Una coalición de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil ha pedido a la Corporación Financiera Internacional del sector privado del Banco Mundial que adopte medidas de carácter obligatorio y mecanismos de control para garantizar que los gobiernos que reciben apoyo financiero para la respuesta a la COVID-19 velen por la protección de los derechos de los trabajadores, lo que abarca la protección del empleo; que las empresas proporcionen planes de salud y cuidado infantil y otros tipos de protección social; una buena seguridad y salud ocupacional; y permisos remunerados por enfermedad y motivos familiares. Además, los sindicatos han hecho un llamamiento para que se cancele la deuda de los países de renta media y baja o que se apruebe una moratoria de los pagos a condición de que utilicen el nuevo margen de maniobra fiscal para invertir en proyectos de infraestructura relacionados con los ODS y en los que se garanticen unas condiciones laborales adecuadas.

2. Conclusiones

En esta nueva realidad producto de la COVID-19, la opinión pública ha cambiado notablemente en lo que respecta a la apreciación de los trabajadores y el papel de los sindicatos. Los trabajadores protegidos por convenios colectivos han sido los que menos han sufrido las repercusiones económicas del coronavirus. Se ha ratificado la función de los sindicatos como defensores de la protección social para toda la población y los derechos de los trabajadores, sin olvidar a los trabajadores migrantes y los informales. A pesar de la crisis económica, algunos sindicatos de los países más ricos han comprobado que su número de afiliados ha aumentado en los últimos meses.

En el plano regional e internacional, la ICM ha defendido a ultranza las políticas destinadas a proteger el empleo, los ingresos y la salud de todos los trabajadores. Las respuestas de la ICM y sus afiliados también han subrayado el papel esencial y la relevancia de los sindicatos frente a la perturbación económica que atravesamos y para reafirmar la importancia del diálogo tripartito.

Al convocar las reuniones en línea “Hola, ¿qué tal?”, la ICM consiguió que los afiliados pudieran mantenerse en contacto, poner en común sus vivencias y formarse opiniones sólidas y fundamentadas que resultaron ser clave en la negociación de las medidas de protección del empleo y salarial, oponiéndose a las tentativas oportunistas de debilitar la seguridad del empleo, socavar las leyes laborales o los acuerdos de negociación colectiva y sin dejar de alzar la voz por quienes han sido despedidos sumariamente u obligados a tomar una licencia no remunerada. La base de datos de la ICM y las páginas web de la respuesta sindical ante la COVID-19 han sido herramientas muy útiles para mantener informados a los afiliados y que pudieran defender su postura basándose en hechos y cifras actualizadas y en las experiencias de otros países. El fondo de solidaridad de la ICM, que ha recibido generosas contribuciones de los afiliados más ricos y de otras organizaciones de apoyo solidario, proporcionó asistencia práctica inmediata a los afiliados de los países en desarrollo para hacerles llegar una ayuda humanitaria muy necesaria.



La COVID-19 ha demostrado de la manera más cruel que, en un mundo interconectado, nadie está protegido hasta que toda la población lo está. Se ha producido una convergencia de varias crisis que no entienden de fronteras: la emergencia climática, el aumento de las desigualdades y la pandemia. El debate con respecto a las políticas públicas sobre muchos temas primordiales ha adquirido un nuevo carácter de urgencia. Es muy posible que los gobiernos y las instituciones multilaterales se vean obligados a reconsiderar el papel del Estado a la hora de abordar las desigualdades económicas y sociales, ya que aspiran a que los países sean menos vulnerables a futuras epidemias y desastres naturales provocados por la emergencia climática. La recuperación de esta crisis puede ser una oportunidad para ampliar los derechos de los trabajadores, lograr que las empresas rindan más cuentas y reformular los pactos sociales desde la base de unos servicios públicos de calidad y la necesidad de hacer frente a la emergencia climática. En colaboración con otros sindicatos del ámbito internacional y organizaciones de la sociedad civil, la ICM y sus afiliados establecen alianzas progresistas sólidas y solidarias encaminadas a la acción colectiva con el fin de forjar un futuro basado en una recuperación ecológica y limpia.

- Respuestas sindicales ante la COVID-19 de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM). Disponibles en: https://www.bwint.org/es_ES/cms/covid-19-respuesta-sindical-1689.
- Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM). “Construir un mundo mejor para todos. Declaración de la ICM sobre la COVID-19: Resistencia frente a la adversidad a través de la sindicación”, 25 de junio de 2020. Disponible en: https://www.bwint.org/web/content/cms.media/2408/datas/buildbetterfuture_es.pdf.
- Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM). Guía Práctica de Salud y Seguridad para Sindicatos Durante la Pandemia de COVID-19, 5 de febrero de 2020. Disponible en: https://www.bwint.org/es_ES/cms/covid-19-respuesta-sindical-1689.
- Confederación de Asociaciones Internacionales de Contratistas (CICA). “Strategic Watch: COVID-19 Overview by country and region” (situación a fecha del 8 de mayo de 2020). Disponible en: http://www.cica.net/wp-content/uploads/2020/05/CICA_COVID-19-Overview_May-8.pdf.
- Confederación de Asociaciones Internacionales de Contratistas (CICA). “Strategic Watch: COVID-19 Overview by country and region” (situación a fecha del 17 de febrero de 2021). Disponible en: http://www.cica.net/wp-content/uploads/2021/02/COVID-19-Overview_February_Week-07.pdf.
- Sindicato de la Construcción, Silvicultura, Servicio Marítimo, Minería y Energía de Australia (CFMEU), Victoria (Australia). “Coronavirus (COVID-19) Guidelines for the Building and Construction Industry Victoria”. Disponible en: <https://vic.cfmeu.org.au/news/covid-19-building-industry-guidelines-march-31>.
- Carta del Consejo de Sindicatos Globales al Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus con motivo de la publicación de la guía de la Organización Mundial de la Salud Consideraciones relativas a las medidas de salud pública y sociales en el lugar de trabajo en el contexto de la COVID-19, 20 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.bwint.org/es_ES/cms/news-72/icm-desafia-a-la-oms-sobre-el-asesoramiento-covid-19-para-los-lugares-de-trabajo-1879.
- “El Consejo de Sindicatos Globales quiere que el COVID-19 se clasifique como enfermedad profesional”, 28 de abril de 2020. Disponible en: https://www.bwint.org/es_ES/cms/news-72/consejo-de-sindicatos-globales-quiere-que-el-covid-19-se-clasifique-como-enfermedad-profesional-1801.
- “European Commission Energy Commissioner calls for EU building renovation wave”. Disponible en: <https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-building-renovation-wave-set-for-launch-in-september/>.
- Federación Europea de la Industria de la Construcción (FIEC). “COVID-19 Construction Observatory”. Disponible en: <http://www.fiec.eu/en/cust/documentview.aspx?UID=c285d276-9b2e-4bdb-8ed2-7fb411d5e60d>.
- Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera (FETCM). Respuestas de la FETCM sobre la COVID-19 por y para los afiliados. Disponibles en: <https://www.efbww.eu/publications-and-downloads/press-releases/covid-19-efbww-info-from-and-for-efbww-affiliates/481-a>.
- Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera (FETCM). “26 concrete demands to direct EFBWW priorities in the coming 12 months”, 26 de mayo de 2020. Disponible en: <https://www.efbww.eu/news/26-concrete-demands-to-direct-efbww-priorities-in-the-coming-12/929-a>.
- FETCM, CEI-Bois, FEP, EOS y EPF. “Joint Position Paper on the Renovation Wave”, 6 de noviembre de 2020. Disponible en: <https://www.efbww.eu/news/joint-position-paper-on-the-renovation-wave/1409-a>.
- “European Commission Energy Commissioner calls for EU building renovation wave”. Disponible en: <https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-building-renovation-wave-set-for-launch-in-september/>.
- Federación Europea de la Industria de la Construcción (FIEC). “COVID-19 Construction Observatory”. Disponible en: <http://www.fiec.eu/en/cust/documentview.aspx?UID=c285d276-9b2e-4bdb-8ed2-7fb411d5e60d>.
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Nota de orientación sobre políticas “Impactos de la COVID-19 en las cadenas de valor de la madera y la respuesta del sector forestal. Resultados de una encuesta mundial realizada en 2020”. Roma. Disponible en: <http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB1987ES>.
- Declaración conjunta de la Federación de la Industria Europea de la Construcción, la Confederación Europea de Constructores y Construction Products Europe: “European Recovery Fund: The construction ecosystem as priority with at least €320B dedicated budget”, 30 de abril de 2020. Disponible en: <http://www.fiec.eu/en/cust/documentrequest.aspx?DocID=48672>.
- Fondo Monetario Internacional (FMI). World Economic Outlook: “The Great Lockdown”, abril de 2020. Disponible en: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020>.
- Base de datos del FMI sobre las respuestas normativas ante la COVID-19. Disponible en: <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19>.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo”, séptima edición, 25 de enero de 2021. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). Análisis de tendencias mundiales sobre el papel de los sindicatos en tiempos de COVID-19, 25 de enero de 2021. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_767975.pdf.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Impact of COVID-19 on the construction sector. ILO Sectoral Brief”, enero de 2021. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_767303.pdf.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lista de comprobación para afrontar los riesgos de la pandemia de la COVID-19 orientada a la industria de la construcción. Servicio de Administración de Trabajo, Inspección del Trabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo, OIT. Diciembre de 2020. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_769311.pdf.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo”, tercera edición, 29 de abril de 2020. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743154.pdf.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo”, cuarta edición, 27 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745965.pdf.
- Confederación Sindical Internacional (CSI). “The IMF’s Renewed Supply-Side Push: Four decades of structural adjustment and austerity conditionality”. Disponible en: <https://www.ituc-csi.org/imf-renewed-supply-side-push?lang=en>.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Tackling coronavirus (COVID-19) – contributing to a global effort: a series of policy responses on governance, inequalities and social challenges and resilient healthcare”. Disponible en: <http://www.oecd.org/coronavirus/en/#policy-responses>.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “The Social and Economic Impact of COVID-19 in the Asia Pacific Region”, 28 de abril de 2020. Disponible en: <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/the-social-and-economic-impact-of-covid-19-in-asia-pacific.html>.
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). “Adopting decarbonisation policies in the building and construction sector: Costs and benefits”, 2019. Disponible en: <https://globalabc.org/resources/publications/adopting-decarbonization-policies-buildings-and-construction-sector>.
- Banco Mundial. “Social protection and jobs responses to COVID-19: Real-time review of country measures”, 8 de mayo de 2020. Disponible en: <http://documents.worldbank.org/curated/en/448321588971503966/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-May-8-2020>.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). “Situation Report #13”, 12 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200512-covid-19-sitrep-113.pdf?sfvrsn=feac3b6d_2.



BWIF • BHE • BTI • IDS • ICM
www.bwint.org